

THE OBJECTIVE

DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2024

 Desaparecen 74 refugiados nicaragüenses en un pueblo de Valladolid: «Aquí no están» / PÁG. 36

 Un estorbo llamado Savater, por José Luis Pardo / PÁG. 41

 ¿De verdad son tan malos los tomates españoles? / PÁG. 47

La Fiscalía trata de evitar la investigación sobre los chivatazos del Gobierno al entorno de ETA / PÁG. 1



- ▶ La Justicia catalana avala discriminar a las víctimas asesinadas por el bando republicano / PÁG. 18
- ▶ Los 'diez apóstoles' de Yolanda Díaz: así es el nuevo núcleo duro de la lideresa de Sumar / PÁG. 22
- ▶ Vascos y catalanes son los españoles más de izquierdas; murcianos y andaluces, los más de derechas / PÁG. 30

*el*Liberal.



El absentismo y las bajas laborales se disparan el 20% en un año / PÁG. 8



El Gobierno empieza a dudar de que pueda sacar adelante la ley de amnistía / PÁG. 13

elSubjetivo

Lo de 'El País' / PÁG. 57

FERNANDO SAVATER



Un Gobierno contra la ley / PÁG. 65

ANTONIO CAÑO



El escorpión y la rana / PÁG. 69

FÉLIX DE AZÚA



Impunidad de autor / PÁG. 78

GUADALUPE SÁNCHEZ



Tractores que roturan Europa / PÁG. 78

MANUEL PIMENTEL



Los soberanistas nos quieren robar / PÁG. 89

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO



La dictadura de las minorías / PÁG. 98

JAVIER BENEGAS



Cómo Sánchez traicionará a Illa / PÁG. 106

CÉSAR CALDERÓN



ESTA EDICIÓN HA SIDO PATROCINADA POR:



MÁS INFORMACIÓN: WWW.THEOBJECTIVE.COM

Tribunales

El fiscal trata de evitar la investigación sobre los chivatazos del Gobierno al entorno de ETA

La Asociación Dignidad y Justicia, que aportó nuevas pruebas, arremete contra la posición del Ministerio Público



Ilustración de Alejandra Svriz.



Fran Serrato

@FcoSerrato
fs@theobjective.com

Publicado: 06/02/2024

La Fiscalía se opone a prorrogar la causa de los homenajes a los presos etarras. El juez Manuel García-Castellón decidió reabrir la después de que Dignidad y Justicia aportara nuevos documentos que incluyen supuestas filtraciones al entorno de ETA desde el Gobierno. La organización que preside Daniel Portero quiere que se esclarezca el papel del jefe de prisiones de Fernando Grande-Marlaska, cuyo nombre aparece en los informes policiales como la persona que ofrecía información sensible a la izquierda

abertzale. Sin embargo, la posición del Ministerio Público cierra la puerta a continuar con las pesquisas por esa vía.

García-Castellón decidió la semana pasada reabrir la causa que investiga un centenar de homenajes a presos etarras entre 2016 y 2019. El magistrado revoca así el auto que dictó en octubre para cerrar la instrucción, tal y como solicitaba la Fiscalía. El cambio se produce tras la petición de Dignidad y Justicia, que hace unas semanas presentó un escrito de alegaciones plagado de mensajes entre miembros de la izquierda abertzale, que lanzaban «directrices e instrucciones» a familiares y presos etarras.

El texto incluía una serie de mensajes de texto, audios y correos electrónicos en los que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, daba cuenta de forma periódica a personas vinculadas con la izquierda abertzale sobre acercamientos, progresiones de grado de los presos etarras y hasta de la estrategia procesal de algunas víctimas de ETA. En su última resolución, García-Castellón reclama un informe para conocer las personas que intervenían en los chats, el primer paso para llegar hasta el jefe de prisiones de Marlaska.

Los presos de ETA

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro se ha mostrado especialmente duro con la idea de investigar a Ortiz, ya que asegura que ni el juez ni la asociación señalan los delitos que se le imputan en las comunicaciones aportadas. «En las mismas no se aprecia atisbo alguno de prevaricación (...) toda vez que todas las cuestiones relacionadas con la política penitenciaria a la que se hacen referencia están sujetas al control del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria con intervención del Ministerio Fiscal».

El recurso de apelación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sostiene que, en ocasiones se han accedido a las propuestas realizadas por las Juntas de Tratamientos mientras que en otras se han impugnado «sin que a lo largo de todos estos años se haya apreciado en ningún momento indicios de comisión de delito alguno ni por el Ministerio Fiscal, ni por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ni por las Salas de lo Penal de la Audiencia Nacional».

García-Berro recalca en el escrito que «tantos y tan cualificados ojos no han visto a lo largo de tantos años indicio de criminalidad alguna». El fiscal descarta la existencia de prevaricación «por razones obvias» y niega que las conversaciones que mantuvo Ortiz con el entorno de ETA puedan ser calificadas como revelación de

secretos, «puesto que no hay secreto alguno que revelar pues se considera confidencial cualquier tipo de información que esté protegida por la ley, como datos personales, documentos clasificados, investigaciones en curso, la privacidad de las personas (...) el cual no es el caso».

Dignidad y Justicia arremete contra la posición del Ministerio Público, ya que considera que las pruebas que aportó hace unas semanas debieron ser atisbadas por la Fiscalía, para quien pasaron desapercibidas. «Hemos puesto sobre la mesa pruebas que vinculan al jefe de prisiones de Marlaska con el entorno de ETA. No entiendo qué problemas tiene la Fiscalía en que se investigue esto. Seguiremos adelante porque siempre hemos luchado en los tribunales contra ETA y sus colaboradores», insiste Portero.

El jefe de prisiones de Marlaska

El fiscal considera que el recurso de reforma interpuesto por Dignidad y Justicia el pasado 18 de enero está «fuera de plazo», por lo que no se pueden estimar. Además, acusa a la asociación de pretender realizar «una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen».

Los investigadores no identifican a Ortiz de manera explícita, pero los documentos en poder de la Audiencia Nacional apuntan directamente a él porque su nombre aparece de forma íntegra en las comunicaciones. Sus interlocutores eran Joseba Azkarraga (dirigente de Sare) y los abogados de presos de ETA Julen Arzuaga y José María Matanzas. Todos ellos informaban de las conversaciones con el jefe de prisiones de Marlaska al etarra Antonio López Ruiz, alias Kubati, a quien la Fiscalía pidió procesar hace dos semanas por organizar presuntamente un centenar de ongi etorris.

Entre los mensajes intervenidos resalta uno del 25 de febrero de 2019, en el que el secretario general de Instituciones Penitenciarias escribe a Arzuaga para informarle de que tres días antes se había acordado remitir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el programa de tratamiento individualizado que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Basauri. A continuación reenvía el email a Kubati, al que los investigadores consideran en el eje de la estrategia de la izquierda abertzale.

En esos días, Kubati escribió a Arzuaga para reclamarle «el email que te envió Ortiz de IIPP (siglas de Instituciones Penitenciarias) donde te dejaba claro el criterio sobre traslados a Euskal Herria para operaciones en el hospital». Un mes más tarde era

Arzuaga, exparlamentario de Bildu, quien preguntaba en un chat en el que están incluidos otros miembros de la izquierda abertzale si había «funcionado el doping», en referencia a un mensaje al jefe de prisiones.

Los tiempos de la instrucción

García-Berro subraya que «todos los esfuerzos argumentativos y el afán por alargar la instrucción hacia ninguna parte o hacia algún lugar alejado de los fines de la justicia y del interés de las víctimas devienen inútiles». En su opinión, Dignidad y Justicia hace mención «a hechos completamente ajenos a la instrucción». El fiscal también advierte a García-Castellón de que «no es lo mismo acompañar los tiempos a la instrucción que la instrucción a los tiempos».

El representante del Ministerio Público se opone a reabrir la causa de los homenajes a presos etarras porque no observa enaltecimiento del terrorismo, sino un delito continuado de humillación de las víctimas. El fiscal considera que los actos están suficientemente investigados y deben llevarse a juicio para restaurar a las víctimas en su dignidad «que fue gravemente quebrantada» por la organización sistemática de ongi etorris, una fórmula que desapareció en 2023, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). En cambio, la asociación documentó ese año 466 actos de apoyo a ETA.

Arzuaga, exparlamentario de Bildu, quien preguntaba en un chat en el que están incluidos otros miembros de la izquierda abertzale si había «funcionado el doping», en referencia a un mensaje al jefe de prisiones.

En opinión de García-Berro, en los chats ni se imparten directrices ni instrucciones ni la actividad desplegada puede calificarse de criminal, porque en ese caso se estaría incurriendo en «una investigación prospectiva». E insiste: «No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito. Basta un análisis de los mensajes que leyeron los investigados».

El fiscal sostiene que esos mensajes se producen entre «ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses sin que de las mismas se desprenda relación alguna en la organización de los actos de homenaje a los terroristas. Y concluye: «No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes».

Economía

El absentismo y las bajas laborales se elevan el 20% en un año y alcanzan ya cotas históricas

El caos sanitario y el envejecimiento de la población trabajadora incrementan la magnitud del problema



Elma Saiz | Europa Press



Enrique Morales

@enriquemorales
em@theobjective.com

🕒 Publicado: 05/02/2024

Las bajas por incapacidad temporal y el absentismo siguen imparables desde la pandemia y se han convertido en uno de los problemas más acuciantes del mercado laboral. Las bajas suponen un coste añadido muy importante para los empresarios y la Seguridad Social. Además lastran la productividad y tras ella se ocultan asuntos clave como cuántos ocupados realmente acuden a sus puestos de trabajo.

El caos sanitario y el envejecimiento de los trabajadores, muchos al borde la jubilación, han sido detonantes para registros de récord. Los datos analizados por de THE OBJECTIVE proceden de la Estadística de Incapacidad Temporal de la Seguridad Social y del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo que elaboran BBVA Research, Fedea y Sagardoy Abogados.

Los datos de la Seguridad Social muestran que hasta octubre de 2023 la media de procesos de baja mensual alcanzó los 688.680, 115.000 más que la media de 2022 -año completo-. Esto supone un 20% más que ese año y un 62% por encima de los registros de 2021 -año de la reforma laboral-. Con respecto a la pandemia la diferencia ronda el 88%. Del análisis se excluyen las bajas de autónomos y por enfermedades profesionales. Otro de los datos que refuerza el preocupante contexto es la prevalencia por cada mil trabajadores protegidos. Ésta llegó a 53 en octubre, frente a apenas 43,6 de media que se registraron un año antes.

Bajas laborales y ocupación

El número de bajas por contingencias comunes del pasado año es el más alto de toda la serie histórica que comienza en 2002. El contraste de los datos de la serie con los de la Encuesta de Población Activa (EPA) debilitan la explicación de que buena parte del aumento se deba a la subida de

ocupación. En 2007, con un número de ocupados similar al actual y con tasas de actividad superiores, se recogió una media mensual de bajas de 483.000. Son 205.000 menos que las de 2023 y un 43% menos. Sí es cierto es que en periodo de crisis económica las bajas caen debido al desplome del empleo y al miedo a perder el trabajo.

Número de bajas mensuales media

En 2023, media hasta octubre. Se excluyen autónomos y enfermedades profesionales



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones • Creado con Datawrapper

Mientras, el último Observatorio de Fedea destaca que a pesar del aumento del número de ocupados, las horas totales trabajadas apenas variaron en el tercer trimestre. Entre los motivos, según el informe, están el crecimiento del número de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia. Las causas de estas ausencias son, sobre todo, el incremento de las bajas por enfermedad o incapacidad temporal «que afectaron a casi 895.000 trabajadores» y el avance limitado de la jornada laboral.

El coste de las bajas, que asume principalmente la Seguridad Social, no ha parado de crecer. Según el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2023 aumentó otro 15% hasta alcanzar los 25.000 millones de euros. Según el estudio, 1.370.000 trabajadores no acudiera ni un solo día a trabajar durante 2022.

Colapso sanitario y ‘baby boom’

Entre las causas más factibles de este aumento de las bajas laborales están el colapso sanitario tras la pandemia y el envejecimiento de la fuerza laboral. Los exámenes médicos siguen demorándose más de lo que deberían, en parte por la falta de efectivos sanitarios. La burocracia también contribuye al embotellamiento de las tramitaciones. Otro de los factores determinantes es el envejecimiento de las plantillas y los problemas de salud de los trabajadores de más edad.

Orense, Lugo, Palencia y León y Asturias, con un número elevado de ciudadanos mayores, tienen tasas de prevalencia por cada mil trabajadores protegidos por encima de la media. En la lista también aparecen provincias netamente turísticas - Tenerife, Las Palmas y Murcia- y las tres vascas. El envejecimiento de los trabajadores seguirá aumentando vinculado en buena medida al retraso de la edad de jubilación seguirá empeorando los indicadores.

Requisitos de contingencias comunes

Para cobrar una baja hay que estar dado de alta en la Seguridad Social. Si la baja es por contingencias comunes, es necesario haber cotizado al menos 180 días en los cinco años anteriores. Si la baja es por contingencias profesionales no es necesario tener cotizaciones anteriores.

Durante los tres primeros días de la baja médica por enfermedad común o accidente no laboral el trabajador no percibe ningún importe. La empresa se hace cargo del pago entre los días 4 y 15 de la baja asumiendo el gasto. A partir del día 16, comienza el pago delegado. La empresa sigue ingresando el dinero al trabajador pero se lo reembolsa la Seguridad Social. El empresario hace una labor de intermediación y el trabajador recibe la ayuda con la misma regularidad de la nómina.

Desde el 20 de febrero de 2020, no es posible despedir al trabajador por bajas médicas acumuladas. El gobierno en esta fecha, derogó el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que era la norma que permitía el llamado ‘despido objetivo por bajas justificadas’.

Política

El Gobierno empieza a dudar de que pueda sacar adelante la ley de amnistía

Fuentes de Moncloa prevén que tendrán que ir a la prórroga en la Comisión de Justicia



María Jesús Montero, Pilar Alegría y Yolanda Díaz | Europa Press.



Ketty Garat

@KettyGarat
kg@theobjective.com

🕒 Publicado: 07/02/2024

Donde antes había certezas, ahora hay dudas. El Gobierno ha empezado a emitir señales de incertidumbre ante la aprobación de la ley de amnistía. Frente al mensaje de confianza férrea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en La Sexta, -«Estoy convencido de que esta ley de amnistía va a salir»-, ministros del Ejecutivo expresan en privado sus recelos e interrogantes sobre la aprobación definitiva de las medidas de gracia. Por primera vez desde que se inició la tramitación de la

norma hace dos meses y medio, miembros del Consejo de Ministros admiten que tienen dudas de si llegará a recibir la luz verde del Parlamento español: «Tenemos las mismas dudas que todos».

Una desconfianza que no se sustenta en la decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo que, en contra del criterio del Gobierno, del fiscal general del Estado y el fiscal ponente Álvaro Redondo, dictaminó este martes que sí existen indicios de un delito de terrorismo que servirían para imputar a Carles Puigdemont, tal y como sostiene el juez García-Castellón. El Ejecutivo deslizó este martes que «no nos sorprende» y se precipitó a avanzar que la Fiscalía es «un órgano jerárquico» y que «la decisión la tiene quien la tiene», esto es, el fiscal general Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la amplia mayoría de fiscales que considera que hay indicios de delitos de terrorismo en lo sucedido en Cataluña en 2019 (12 a 3), y que apoya que el Supremo investigue por ello a Puigdemont (11 a 4), genera suspicacias en Moncloa ante la constatación de que fiscales progresistas suscriben las tesis contrarias al Ejecutivo.

El Gobierno prevé una 'prórroga' en la Comisión de Justicia

Al Gobierno ni le sorprende ni le preocupa el mensaje lanzado este martes por los fiscales, o eso dice. Y se centra en la que será la siguiente batalla parlamentaria en la Comisión de Justicia. La Mesa del Congreso remitió este martes el dictamen de la ley aprobado en pleno nuevamente a la comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, que será elevado a pleno antes del 21 de febrero. Si llegado a ese plazo no se hubiera logrado un acuerdo, la Comisión de Justicia podría solicitar una prórroga por otros 15 días hasta el 6 de marzo. Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE descuentan que Junts quiere llevar «al límite» la adopción de un acuerdo y que, por lo tanto, será necesario solicitar la prórroga más allá del 21 de febrero.

Los más optimistas creen que entonces sí habrá posibilidad de un acercamiento con Junts antes del 6 de marzo, lo cual permitiría aprobar la amnistía en el mes de plazo que permite el artículo 131.2 del reglamento del Congreso. Porque si no se ajustan a esos 30 días de margen, la ley decaería y habría que iniciar la tramitación desde cero. En Moncloa confían en que «la amnistía se aprobará», pero no son pocos los que, al margen de afirmaciones rotundas y dogmas de fe, piden aterrizar en lo concreto

esas convicciones. La clave está en el cómo: en dónde puede ceder el Ejecutivo para lograr que Carles Puigdemont se avenga a cerrar un acuerdo que garantice la estabilidad del resto de la legislatura. Y es en este campo donde afloran las dudas y se incrementa el pesimismo.

La reforma de la Lecrim: «Es complicado»

El Gobierno sostiene que «la ley no se va a tocar» y que «lo único» en lo que podrían trabajar es en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) a la que abrió la puerta el presidente Sánchez en La Sexta. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario apuntan a que se trata más bien de «una forma que utilizó el presidente de desviar la atención del terrorismo o los delitos de alta traición, que no vamos a tocar ni incluir en la amnistía». Dicho de otra forma, la reforma de la Lecrim fue un señuelo de Sánchez para desviar la atención y decirle a Junts que «hay más cosas de las que podemos hablar, no sólo de la ley de amnistía» que, insisten, «no se toca».

Es más, desde Moncloa admiten que «es complicado» acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque «hay que mantener un equilibrio entre las partes». Si bien aceptan que es necesario abrir una reflexión sobre la necesidad de «acortar los tiempos de garantías para que los procesos no se prolonguen 15 años»,

añaden que el equilibrio de todas las partes en el proceso judicial «es muy complejo». Así las cosas, el Gobierno se resigna a una sola vía de negociación con Junts: la presión. Que el tiempo juegue en su contra y asuman que no se puede ir más allá de la ley «valiente y reparadora» que han pactado con PSOE y ERC.

Miembros relevantes del Consejo de Ministros señalan que «ellos (Junts) también tienen coste. Están midiendo ahora las consecuencias» de haber tumbado el conjunto de la ley de amnistía en el pleno del Congreso. «Lo que nos dicen en privado es lo mismo que en público», explican en Moncloa. Y por ello, las palabras de Sánchez sobre la Lecrim podría ser sólo una forma de permitirles la transición hacia el voto favorable, de vestir la rectificación de Junts, aunque no se vaya a concretar en nada. Los socialistas insisten en no mover una coma del actual texto porque ello supondría un dictamen desfavorable del Tribunal Constitucional. Y recuerdan que el PSOE ya se ha dejado suficientes pelos en la gatera, como incorporar los delitos de terrorismo entre los beneficiados de la amnistía siempre y cuando «no vulneren los derechos humanos».

Cataluña

La Justicia catalana avala discriminar a las víctimas asesinadas por el bando republicano

La Audiencia de Barcelona da la razón a la Generalitat en su negativa a dignificar una fosa con 700 muertos 'nacionales'



Excavación de una fosa de la Guerra Civil. | Europa Press



Marcos Ondarra

@MarcosOndarra
mo@theobjective.com

Publicado: 09/02/2024

La Justicia catalana considera que «el marco legal actual otorga preferencia a las acciones respecto a las víctimas del llamado bando nacional». Esto es, que según la ley de memoria democrática aprobada por el Gobierno de España en 2022 «hay una preferencia respecto a las víctimas que lo fueron por ser contrarias al régimen instaurado con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura». Así lo prescribe un auto judicial de la Audiencia

Provincial de Barcelona, emitido el pasado 29 de enero, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Este auto archiva la querella criminal interpuesta por la Asociación Raíces contra la Dirección de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña en relación a la fosa de Montcada i Reixac, una de las más grandes de la región, donde yacen aproximadamente 700 cadáveres de fusilados por el bando republicano.

La asociación querellante considera que la decisión de la Justicia catalana es una «vergüenza», ya que «es la primera vez que una resolución judicial privilegia a unas víctimas sobre otras, lo cual es un auténtico escándalo, porque rompe el marco de convivencia y reconciliación que se marcó con la Constitución de 1978».

Cabe recordar que, tal y como ha ido informando este medio, la Generalitat se comprometió en septiembre de 2022, siendo el president Quim Torra, a realizar una labor de dignificación sobre la fosa más grande de la retaguardia republicana en la región. Sin embargo, casi un año y medio después, no se ha realizado ninguna labor memorialística, y ya no tiene visos de producirse.

«Lo que viene a decirnos la resolución judicial es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, y que hay una represión como la republicana que no merece atención ni reproche alguno de los s.

Tribunales de Justicia en cuanto a la inacción de las autoridades de la Generalitat Catalana ante esa realidad», denuncia Raíces.

La fosa de Montcada

Lo sucedido en el cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona) sigue siendo una laguna de la llamada memoria histórica, y eso que se trata de la fosa más grande de represaliados en la retaguardia de la Guerra Civil de toda Cataluña. Se estima que en la actualidad pueden estar ahí enterrados los cadáveres de unas 700 personas ejecutadas entre julio de 1936 y abril de 1937.

En el cementerio de Montcada fueron asesinadas cerca de 1.300 personas por ser consideradas afines al alzamiento militar contra la República, muertas en su gran mayoría por patrullas de la CNT-FAI. Es la fosa más grande de la violencia en la retaguardia republicana en Cataluña. Durante los años cuarenta, las autoridades franquistas exhumaron unos 1.200 cadáveres en Montcada (100 eran irrecuperables por haber sido incinerados en los hornos de la vecina cementera Asland). De estos, unos 700 no fueron identificados, por lo que se volvieron a inhumar en la fosa común que sigue intacta. Así lo acredita la investigación de Ricard Ramos y Josep Bacardit en el libro 940 días. La guerra civil en Montcada i Reixac.

En ese lugar se albergan ahora mismo muchos cadáveres mutilados, que habían sido torturados hasta la muerte en checas de Barcelona. Entre ellos podría estar el de sor Apolonia del Santísimo Sacramento, que fue previamente torturada en la checa de San Elías por los anarquistas de la CNT-FAI. Es por esto que la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces lleva dos años peleando con el Govern para que exhume los restos mortales en un acto de «reparación».

«Una injusticia»

Tras haber llevado el caso a la Justicia, y haber emitido esta un auto en favor de la Generalitat, desde la entidad querellante lamentan que «una Justicia que no respeta a los muertos de la represión frentepopulista no puede ser considerada justicia, sino todo lo contrario», y denuncian que «la Justicia actual nos dice que hay que discriminar a las víctimas, sin establecer ningún criterio adicional salvo el ideológico, a pesar de que en Montcada se produjo el mayor crimen que hubo en la retaguardia republicana en zona catalana».

«Los descendientes de los asesinados en Montcada y en el resto de los cementerios clandestinos deben conocer el nuevo estatus legal de sus antepasados, que es el mismo que tienen los que no apoyan al actual Gobierno y a su justicia politizada, el ser ciudadanos de segunda o esclavos de un régimen tiránico como el actual, como fue la criminal II República durante la Guerra Civil española», zanzan.

Política

Los 'diez apóstoles' de Yolanda Díaz: así es el nuevo núcleo duro de la lideresa de Sumar

Díaz diseña una cúpula «plurinacional», pero centrada en madrileños y catalanes con márgenes de «disidencia ordenada»



Diez miembros de la ejecutiva provisional de Sumar. | Twitter / Íñigo Errejón



Luca Costantini

@LucaCostantini

lcostantini@theobjective.com

Publicado: 09/02/2024

Un núcleo duro moldeado alrededor de dirigentes fieles a Yolanda Díaz y otros miembros de Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes. Así queda la cúpula en Sumar, cuando falta algo más de un mes para su asamblea fundacional. El partido de Díaz ha elaborado un documento organizativo, que como adelantó este diario, plantea una formación política de carácter confederal. De cara a la asamblea, el partido cuenta con un grupo de promotores de alrededor de 100 dirigentes, de los que 20

conforman una ejecutiva provisional. No obstante, en la presentación del pasado miércoles por la noche, tan solo diez personas además de Yolanda Díaz explicaron las líneas generales del nuevo partido. Se sentaron al lado de la vicepresidenta aquellos que ya se consideran como los integrantes de su nuevo núcleo duro.

Yolanda Díaz ha diseñado una dirección de Sumar invocando el principio de la «plurinacionalidad», aunque de facto la ha llenado de dirigentes provenientes de Más Madrid, Izquierda Unida y los Comunes, con una muy escasa presencia de cuadros andaluces, vascos, extremeños, canarios o de las dos Castillas. El llamado «grupo promotor» de Sumar, entendido como una «dirección ampliada» antes de su constitución oficial, que se formalizará en la asamblea de finales de marzo, tiene el objetivo de arrancar un proceso de construcción de un partido (aunque de momento rechazan esa nomenclatura y abogan por definirse como un «nuevo tipo de sujeto político colectivo» cuyo fin es «la construcción de un mundo mejor») que quiere tener más presencia en los territorios y en la sociedad civil.

Díaz invoca la «plurinacionalidad» de España como uno de los ejes de este organismo directivo, aunque en realidad la ministra se ha rodeado de políticos provenientes de formaciones madrileñas y catalanas, además de personas de confianza

gallegas y de otros integrantes de Sumar. El modelo de partido, por otro lado, es el confederal, tal y como adelantó en exclusiva THE OBJECTIVE.

Más Madrid y Comunes catalanes

Es suficiente mirar los nombres de los principales dirigentes de Más Madrid y de los Comunes integrados en el nuevo grupo promotor para detectar ese desequilibrio. Por un lado, Mónica García, Rita Maestre, Javier Padilla y Guillermo Zapata (que formó parte del grupo municipal de Más Madrid), y por el otro, Aina Vidal, Ernest Urtasun, Josep Vendrell, Joan Subirats, Gerardo Pisarello o Joan Mena, entre otros. Todos destacados dirigentes de la formación que lidera Ada Colau, a los que hay que añadir Candela López, que ha sustituido a Lilith Verstrynge en el Congreso.

Pero es más, Díaz también ha integrado en este nuevo grupo impulsor (formado por 100 personas y que representa la avanzadilla de una ejecutiva más reducida que se nombrará más adelante, y que ahora se limita a 20 integrantes) a los madrileños Pedro del Cura, Enrique Santiago, Jesús Santos o Txema Guijarro, de Izquierda Unida, o exdirigentes de Podemos de origen madrileño. A ellos hay que añadir figuras como Amanda Meyer o Sira Rego, cuadros nacionales de IU.

A ese grupo, Díaz ha añadido algunas figuras integradas directamente en Sumar. Estos son Carlos Corrochano, Esther Gil de Reboleño, Elizabeth Duval, Paula Moreno, Agustín Santos y María Eugenia Rodríguez Palop, aunque esta última, al igual que Lander Martínez, también formó parte de Podemos. Con ellos, también integran la ejecutiva ampliada Carlos Martín Urriza, que proviene de Comisiones Obreras, Francisco Sierra, profesor universitario de Sevilla cercano al errejonismo, o la escritora Violeta Serrano.



Íñigo Errejón 
@ierrejon · [Follow](#)



Hoy en la reunión del Grupo Promotor de [@sumar](#)

Aprobamos abrir para su discusión la ponencia político-ideológica y el documento organizativo.

Conseguimos evitar la involución reaccionaria. Ahora toca dejar la fase defensiva y ser la fuerza para la expansión de la democracia.



9:27 PM · Feb 7, 2024



Una cúpula en la cúpula

Más allá del grupo promotor de 100 integrantes, Sumar se coordina a través de un sanedrín de 20 miembros, que forman la ejecutiva provisional. Pero tan solo diez de ellos se han sentado el pasado miércoles en el primer acto clave en la construcción del partido. Este puñado de dirigentes conforman el verdadero núcleo duro de la política gallega y de Sumar.

Estos son Josep Vendrell, dirigente que proviene de los Comunes y considerado el estratega de la lideresa; Íñigo Errejón, fundador de Más País y ahora figura plenipotenciaria del partido (portavoz en el Congreso y encargado de definir las líneas políticas, en colaboración con Marta Lois, ocupada en la campaña gallega); Ernest Urtasun, ministro de Cultura, coportavoz y dirigente destacado de los Comunes; Candela López, una persona de máxima confianza de Ada Colau y que entró en el Congreso tras la salida de Lilith Verstryngge; y Lander Martínez, exbarón vasco de Podemos, quien coordinó las primeras giras de Sumar durante el «proceso de escucha» y que seguirá ocupado en la organización.



A estos cinco dirigentes se suman otros cinco apóstoles de la ministra. Se trata de Agustín Santos Maraver, exembajador en la ONU, diplomático afín a Zapatero y al PSOE y ahora diputado de Sumar; Gerardo Pisarello, integrante de la Mesa del Congreso y también dirigente catalán de los Comunes; Enrique Santiago, líder del PCE, dispuesto a ceder a Sira Rego el control de Izquierda Unida pero a cambio de obtener cuotas de poder en Sumar; Carlos Carrochano, un analista experto en política internacional, elegido directamente por la ministra y considerado afín al errejonismo, pero «no orgánico», según comentan fuentes conocedoras de su trayectoria; la economista Paula Moreno, quien se está encargando de explicar en los territorios los objetivos del nuevo partido.

«Disidencia» sí pero «ordenada»

Este sanedrín destaca por estar integrado sobre todo por personas de confianza directa de Yolanda Díaz y miembros de los partidos que más están aportando al proyecto, como los Comunes y Más Madrid. Compromís ha rechazado integrarse en la formación de Díaz, y que se ha mantenido en un planteamiento de futura alianza electoral. Més per Mallorca tampoco está integrado en la ejecutiva, así como no lo están formaciones como la canaria Proyecto Drago.

Aunque de momento Sumar vive un momento fundacional en el que es difícil encontrar comentarios críticos entre los que están colaborando en el lanzamiento, también es cierto que en la trastienda de la formación sí surgen algunos apuntes críticos sobre la ausencia de dirigentes de otras regiones que no sean Madrid, Galicia o Cataluña. Sumar corre peligro de convertirse así en otro artefacto electoral, centrado más en la televisión que en la construcción de un partido político, avisan desde dentro la coalición. También es cierto que la formación acaba de nacer y por delante tendrá ya dos ciclos electores (las elecciones gallegas y las europeas) donde podrá medirse.

En cuanto al documento organizativo aprobado el jueves, Sumar se define como una formación confederal, es decir, donde los miembros de otros partidos integrados en el proyecto tienen autonomía y cuentan con sus representantes en los organismos ejecutivos. Aun así, Díaz prevé que un 70% de cargos internos recaigan en miembros adscritos a Sumar, y por lo tanto, cercanos a ella. El restante 30% será para integrantes de otros partidos. Sumar plantea seducir a personas vinculadas a los partidos políticos pero también a miembros de la sociedad civil. Buscan ser una fuerza política «amable», y con una concepción de la disidencia sui generis. Según explicaron los ponentes, la misión de Sumar consiste en el rearme ideológico del espacio progresista contra la derecha en el que el partido acepta la «disidencia política», pero gestionada de forma «cohesionada» y «ordenada».

España

Vascos y catalanes son los más de izquierdas; murcianos y andaluces, los más de derechas

Un estudio revela que el 44% de los españoles se perciben progresistas, el 33% de derechas y el 19% de «centro»



Íñigo Urkullu y Pere Aragonés | Gobierno Vasco



Marcos Ondarra
@MarcosOndarra
mo@theobjective.com

Publicado: 08/02/2024

El 43,7% de los españoles se considera de izquierdas y el 32,9% de derechas. Entre los primeros destacan los habitantes de País Vasco (56%) y Cataluña (55%), y entre los segundos los de Murcia (42,6%), Castilla y León (39,7%) y Andalucía (37,7%). Así se desprende del análisis independiente elaborado por el consultor Pablo Gracia en base al último Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se pide a los encuestados que se posicionen ideológicamente del 1 al 10.

El gran hallazgo del análisis de apablo.com estriba en la división ideológica de la ciudadanía por comunidades autónomas, aunque antes establece, con arreglo al CIS, que el 19% de los españoles se considera de «centro», sin decantarse por ninguna de las dos opciones antagónicas, mientras que el 4,4% no sabe o no quiere definirse. Por último, el 17% de los españoles se considera de extrema izquierda, mientras que sólo el 8,1% se ubica a sí mismo en la extrema derecha.

CLASIFICACIÓN POR TERRITORIOS CON MÁS POBLACIÓN DE IZQUIERDAS

Posición	CCAA	Izquierda	Centro	Derecha	NS/NC
1	País Vasco	56%	18,4%	19,1%	6,5%
2	Cataluña	55%	18,7%	22,2%	4,1%
3	Comunidad Foral de Navarra	52,7%	14,5	29,3%	3,5%
4	Galicia	50,6%	17,3%	27,5%	4,6%
5	Principado de Asturias	45,9%	19,7%	29,2%	5,2%
6	Illes Balears	44%	21,4%	30,4%	4,2%
	ESPAÑA	43,7%	19%	32,9%	4,4%
7	Comunidad Valenciana	42,6%	18,6%	34,3	4,5%
8	Comunidad de Madrid	42,4%	17,1%	37%	3,5%
9	Canarias	41,9%	21,7%	31,7%	4,7%
10	La Rioja	41,3%	17,1%	35%	6,6%
11	Aragón	41,1%	19,4%	35,1%	4,4%
12	Cantabria	39%	19,9%	36,3%	4,8%
13	Andalucía	38,2%	19,2%	37,7%	4,9%
14	Extremadura	37,6%	20,7%	36,5%	5,2%
15	Castilla-La Mancha	35,9%	22,7%	36,8%	4,6%
16	Región de Murcia	35,1%	19,2%	42,6%	3,1%
17	Castilla y León	34,4%	20,8%	39,7%	5,1%

THEOBJECTIVE
Fuente: Agencia apablo.com

Por regiones, el 56% de los vascos se considera de izquierdas, lo que convierte al País Vasco en el territorio con más sentimiento progresista de España. Le siguen Cataluña, con un 55% de personas de izquierdas, y Navarra, con un 52,7%. De entre estas, la región catalana es la que tiene

una mayor presencia de la extrema izquierda (21,6%), seguida de la vasca (20,7%). El tercer puesto en este caso, de una manera muy llamativa, es para Galicia, con un 20,3%.

Sobre la sociedad vasca y catalana, y la navarra en menor medida, el sociólogo Rubén Tamboleo arguye que sufren «una esquizofrenia política» que consiste en que «aquellos ciudadanos que promueven los valores más identitarios, reaccionarios, diferenciadores y xenófobos, aquellos que se quieren separar del resto y que niegan la solidaridad territorial, son los que se identifican de izquierdas, cuando su postura es lo más antiizquierdista que se puede encontrar», al menos si se aplica el eje izquierda-derecha de los siglos XIX y XX.

Derecha y centro

Por otro lado, las comunidades con más personas de derechas son Región de Murcia (42,6%), Castilla y León (39,7%) y Andalucía (37,7%). Esta última está entre las tres comunidades con más población de derechas, aunque el porcentaje de personas de izquierdas sigue siendo superior en este territorio. Región de Murcia (13,7%), Castilla-La Mancha (11,8%) y Castilla y León (11,5%) son las comunidades con más personas autopercibidas de extrema derecha.

A este respecto, el analista y consultor político Fran Carrillo, ex parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, explica cómo esta región es el ejemplo perfecto de cómo «la tendencia que altera el favoritismo por ciertas opciones se consolida»: «Muchos ciudadanos, sobre todo de perfil moderado y no militante, que en su momento votaron por continuidad de linaje o tradición a la izquierda, han visto que si no gobierna la izquierda, no sólo no pasa nada, sino que todos los indicadores mejoran. No es que Andalucía se haya hecho de derechas, sino que ha dejado de ser de izquierdas, sobre todo por los escándalos de corrupción y saqueo de lo público que protagonizaron los diferentes gobiernos del PSOE (y también IU) y que han penetrado fuertemente en el inconsciente colectivo del andaluz».

Por su parte, Castilla-La Mancha (22,7%), Canarias (21,7%) y Baleares (21,4%) son las tres comunidades donde los encuestados han elegido el centro de forma más habitual. El centro, si bien no es una ideología, sí es una manera de expresar un distanciamiento con ambas corrientes políticas mayoritarias. «Ni de izquierdas ni de derechas», estas personas podrían decantarse por cualquier opción y son la llave para la gobernabilidad en la práctica totalidad de los territorios.

«Por lo general, el porcentaje de los que se dicen de centro hay que incorporarlos al voto de la derecha, pues tienden más a esconder sus simpatías hacia formaciones liberales o conservadoras, complejos

históricos de posición que no existen entre los votantes de izquierdas, que de inmediato saben dónde situarse», considera Carrillo.

Por último, el informe señala que los encuestados de La Rioja (6,6%), País Vasco (6,5%) y Asturias (5,2%) son los que han demostrado más dificultades a la hora de expresar su posicionamiento ideológico, ya que son las comunidades con mayor porcentaje de «no sabe» o «no contesta» en las respuestas.

Sobre el análisis

Pablo Gracia aclara que «este análisis no es una encuesta de intención de voto, sino una visión general de la ideología de las personas en España», así como que «estos porcentajes no están relacionados con ningún resultado electoral, ya que en unas elecciones hay más factores que influyen la decisión final del voto, como la situación económica, el programa electoral o el carisma de los candidatos».

El consultor añade que «los encuestados no fueron preguntados si se consideraban ‘de izquierdas’ o ‘de derechas’, mucho menos si eran ‘de extrema izquierda’ o ‘de extrema derecha’», sino que «en los microdatos del estudio del CIS aparece la valoración del encuestado, sobre 10, de cuál es su ideología política. Este análisis se ha realizado considerando estas valoraciones numéricas».

Por último, sobre los resultados, considera que la mayoría de la población española se siente progresista porque «la historia cada vez menos reciente de España, con una dictadura de por medio, ha impulsado sin ninguna duda el sentimiento de izquierdas en el país, siendo las comunidades con lenguas distintas al castellano donde esta cuestión se ve con más claridad. A veces, incluso da la impresión de que algunas personas tienen reparos al reconocer que son de derechas, a juzgar por las diferencias entre ambas posiciones en casi todo el Estado».

España

El misterio de los 74 refugiados nicaragüenses en un pueblo de Valladolid: «Aquí no están»

El Ayuntamiento revela a este periódico que no viven ni trabajan allí. La planta fotovoltaica es un proyecto por construir



Villalba de los Alcores (Valladolid). | EFE



Enrique Recio

@RecioEN
er@theobjective.com

Publicado: 03/02/2024

En Villalba de los Alcores (Valladolid) están sorprendidos desde hace unos días con las noticias que están saliendo últimamente en algunos medios de comunicación. En todas ellas se cuenta lo mismo. Que este municipio de 400 habitantes ha acogido y dado trabajo en una planta fotovoltaica a los 74 refugiados que llegaron a España. ‘De EEUU a Villalba de los Alcores: el acuerdo entre Biden y Sanchez lleva a Valladolid a casi un centenar de refugiados’, reza, por

ejemplo, el titular de un periódico. Sin embargo, no es así. Ni estas personas viven allí ni trabajarán, al menos, a corto plazo, según revelan a THE OBJECTIVE desde el Ayuntamiento de la localidad.

Quien responde al teléfono es Natalia Sánchez, teniente de alcalde de Villalba. Este periódico se había puesto en contacto con el Consistorio para conocer cómo era la vida de los refugiados y cómo estaba siendo su integración entre los vecinos desde que llegasen en el mes de diciembre. Tras escuchar el contenido de nuestra pregunta, Sánchez responde de inmediato: «No, en Villalba no hay nadie. De hecho, nos ha sorprendido que saliera nuestro municipio, aquí no tenemos viviendas que podamos ofrecer, tenemos mucha falta de vivienda en el pueblo».

«Pero, ¿y la planta fotovoltaica? ¿Están trabajando allí?», repregunta este diario. «Sí, el proyecto existe, pero no está hecho, vaya, las obras no han empezado. Por ahora es un proyecto. De verdad que nos ha sorprendido un poco por eso, porque por ahora no hay nada», señala Sánchez.

¿Dónde están?

La ubicación de los refugiados nicaragüenses es, por ahora, un misterio. Según aseguraron el pasado jueves a este diario desde Accem, la oenegé que se está encargando de la primera asistencia a las 25 familias, los refugiados estaban terminando

su formación en la empresa y se preveía que empezasen a trabajar a finales de este mes. Un objetivo difícil de cumplir, en base a lo que trasladan desde el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores. Respecto a la vivienda, también señalaron, estaban ayudando a estas personas a asentarse en el municipio, así como en otros de la provincia. Por el momento, sin embargo, no hay nadie allí.

Fue la propia ministra de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, quien desveló en diciembre la reubicación de 23 refugiados nicaragüenses y sus familias en Valladolid, también el trabajo que iban a desempeñar en el parque fotovoltaico de la empresa Cobra en Villalba de los Alcores, que, por ahora, es un proyecto por construir.

500 refugiados más

Los nicaragüenses forman la primera remesa de migrantes que nuestro país acogerá este año, en el marco de los acuerdos con EEUU y Canadá. A ellos se sumaran otros 500 refugiados latinoamericanos en los próximos meses, y todos ellos —o al menos la mayoría— tendrán un puesto de trabajo, según señalan desde el departamento de Migraciones. Aunque, según las mismas fuentes, se trata de un proceso largo y es difícil concretar fechas. El objetivo es que los refugiados sean reasentados en sectores deficitarios, principalmente en zonas rurales donde las

empresas españolas no encuentran trabajadores residentes en el país, como en teoría, ha ocurrido con los que han llegado a Valladolid.

Esta alianza trilateral se sustenta en la creación de cuatro Oficinas de Movilidad Segura en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Guatemala. Un organismo ideado por la Casa Blanca y que gestiona la unidad de Naciones Unidas que se ocupa de los Refugiados (Acnur), y la que se encarga de las migraciones (OIM). De este modo, los solicitantes de asilo que se encuentran en estas entidades pueden pedir su reubicación a EEUU, Canadá o España, y cada país recibe de acuerdo con los cupos negociados entre los implicados.

Un sistema seguro

Todo ello, por un lado, con el objetivo de que Madrid y Ottawa liberen los flujos migratorios que parten desde América del Sur y Central hacia Estados Unidos, aunque en corta medida, teniendo en cuenta que solo el año pasado recibió 3,2 millones de inmigrantes irregulares; y, por otro, para establecer un sistema de acogida seguro para los refugiados, con garantías para las familias, y, en la medida de posible, con un puesto de trabajo en el país que los recepciona.

Las oenegés encargadas de las oficinas establecen filtros para incluir a las personas más vulnerables dentro de este proyecto y también verifican que los solicitantes no estén registrados en ningún fichero policial, aseguran fuentes del departamento de Elma Saiz. El trabajo más arduo, sin embargo, es dar con un empleo para los refugiados o al menos para alguien de la unidad familiar, una tarea en la que colaboran ministerios, embajadas y organizaciones sin ánimo de lucro, al igual que para el traslado de todos ellos al país de destino.

Opinión

Un estorbo llamado Savater

«Fernando Savater ha sido el tábano que levanta la voz contra los que quieren imponer un pensamiento obligatorio para que nada contraríe su indecencia»



Ilustración de Alejandra Svriz.

JL

José Luis Pardo

Publicado: 03/02/2024

Corría el año 2003. La editorial Pre-textos sacaba a la venta un libro en forma de conversación entre Fernando Savater y un servidor titulado Palabras cruzadas. Seguramente fue el primer libro de filosofía que se escribió en España por correo electrónico, y creo que los dos lo pasamos muy bien enviándonos largas parrafadas, a veces a altas horas de la madrugada. Entre las muchas virtudes de la prosa de Savater se encuentra, en lugar destacado, su claridad moral e intelectual, una virtud poco frecuente en nuestra profesión. Yo, que

llevo leyéndole y escuchándole casi desde que tengo uso de razón, no recuerdo una sola vez en la que sus palabras no me hayan ayudado a iluminar el asunto del que trataban con la luz del acierto, la precisión, el buen humor y la inteligencia, y aquel diálogo electrónico fue para mí un auténtico festín. La editorial organizó una presentación de nuestro libro para la prensa en un restaurante de Madrid.

Pero otros tenían planes distintos. El 8 de febrero ETA asesinó a Joseba Pagazaurtundúa, jefe de la Policía de Andoaín, militante del PSE y miembro activo de la plataforma Basta Ya. El motivo: les molestaba que algunos no pensasen como ellos. Y Savater, fundador de esa plataforma, siempre estuvo en la primera fila de los que molestaban. A lo largo del fin de semana pude verle en televisión, haciendo declaraciones desde el País Vasco en diversos momentos y notablemente afectado por la brutal «ejecución» de su compañero, siempre con la emoción contenida en los límites de la protesta cívica. Nuestro libro llevaba como subtítulo «una invitación a la filosofía», pero en aquel momento me pareció que tanto la filosofía como las invitaciones se habían convertido en cosas obscenamente superfluas bajo la negra sombra del infame crimen. Puesto que los asesinos habían negado el *primum vivere*, no veía yo ocasión para el *deinde*

philosophari (muchos libreros del País Vasco devolvían sin abrir cajas enteras de Palabras cruzadas, no fuera que su lectura incomodase a la cosa nostra). Así que ni siquiera contemplé la posibilidad de que Savater pudiese acudir al restaurante en el que nos habíamos citado con un motivo que ahora se había vuelto menor, pues estaba sobradamente disculpado de este compromiso, porque su tiempo estaba dedicado a la familia de Joseba y a diferentes concentraciones de repulsa. De modo que cuando le vi aparecer, exactamente a la hora prevista y, como él suele decir con su oportuno repertorio shakespeariano, *in spite of thunder*, aprendí una nueva e importante lección de filosofía.

Yo estaba por entonces enfrascado en un librote sobre la dificultad de aprender filosofía, en el que me preguntaba, a propósito de Sócrates, inventor de nuestro oficio, «¿cómo es posible que algunos hombres sean milagrosamente capaces de escapar a la servidumbre del reloj y a la esclavitud del tiempo no-libre, puesto que la naturaleza nos mide a todos con el mismo rasero? ¿Cómo logran estos hombres ser buenos y ser veraces? ¿Qué fuerza prodigiosa —que ha de ser superior a las ataduras de la clepsidra y, por tanto, a la misma naturaleza— les posee para dotarles de semejante potencia y permitirles estar siempre allí donde la verdad les llama y la libertad les convoca, un poco a la manera

como Phileas Fogg consiguió darle la vuelta al mundo como si fuera reversible, y hacerlo en 80 días, es decir, en límites cronométricos precisos, y llegar puntualmente a su cita en Londres? ¿Qué ejercicio practican para lograr tal hazaña y tener siempre un rato para la verdad y para la libertad, para no temer a la muerte que amenaza a quien no haya logrado seducir a sus jueces en el lapso que el reloj de agua tarda en vaciarse?».

Aquel día, al volver a mi casa después de una formidable velada filosófica, pude responder a esta cuestión: «Ellos llegan siempre a tiempo sencillamente porque quieren. Y de ese modo (haciendo de su querer, de su voluntad, la fuerza capaz de vencer a la presión de la clepsidra) muestran su libertad, su condición de hombres libres, que sólo existe en esa acción y mientras la acción dura, y que no se desprende de ningún tipo de ‘marca de distinción’ socialmente otorgada o heredada por linaje. Es entonces cuando este querer libre consigue encabalgarse en los episodios aparentemente sinsentido que jalonan la vida diaria de los atenienses (o de los españoles, o de los chinos, o de los nicaragüenses), y cuando este querer efectivamente puede decir lo verdadero y hacer lo libre». Pido perdón por las autocitas, pero así lo dejé escrito en La regla del juego, con una nota a pie de página para que el lector supiese quién me había ayudado a terminar mi retrato de Sócrates.

«Ahora, los enemigos de la libertad de expresión son los únicos que pueden mantenerles en el poder. Y Savater sigue siendo para ellos un estorbo»

No se puede negar que, desde entonces, los dos nos hemos hecho viejos (lo que no es precisamente un cambio a mejor), pero en ello no hemos tenido ninguna responsabilidad. En lo demás no creo que hayamos cambiado demasiado. Savater sigue molestando a los mismos que molestaba entonces. La diferencia es que muchos de los que en 2003 caminaban tras las pancartas que defendían la libertad de pensamiento hoy se han situado en las mismas ventanas y aceras desde las que quienes entonces justificaban y comprendían las fechorías de los que no toleraban semejante libertad observaban con desprecio y disgusto las manifestaciones de protesta.

Este asombroso «cambio de opinión» del otrora partido de Joseba Pagaza no se debe, obviamente, a ningún progreso moral o intelectual (sino a todo lo contrario): es que, ahora, los enemigos de la libertad de expresión son los únicos que pueden mantenerles en el poder y, por tanto, los que verdaderamente mandan y gobiernan,

ya no sólo en Cataluña o en el País Vasco, sino en toda España. Y Savater sigue siendo para ellos un estorbo.

Esto no quiere decir exactamente que el país haya cambiado. Los secesionistas y los comunistas de salón siempre estuvieron ahí, como siempre estuvo esa parte de la población que, entre otras cosas por las desastrosas políticas educativas, nunca entendió muy bien por qué eran tan importantes las libertades públicas y la igualdad de derechos civiles. Del mismo modo, seguimos aquí los que llevamos leyendo y escuchando a Fernando Savater desde la década de 1970 y para quienes él ha sido tantas veces el tábano que, sin faltar nunca a su cita, levanta la voz contra los que quieren imponer un pensamiento obligatorio para que nada contraríe su indecencia. Dicen que, por no pensar como ellos, le han despedido de un periódico que sería difícil de imaginar sin su contribución, aquel en el que más a menudo ejerció esa labor; pero también algunos atenienses creyeron haber despedido a Sócrates cuando le condenaron, sin saber que eran ellos quienes se condenaban a 2.500 años de vergüenza.

Gastronomía

¿De verdad son tan malos los tomates españoles?

«Voy a enviarle mañana a Ségolène Royal una caja de nuestro mejor tomate de temporada»



Tomate Raf Pintón Premium. | Wikimedia Commons



Juan Manuel Bellver
[@juan_m_bellver](#)

🕒 Publicado: 05/02/2024

Voy a enviarle mañana a Ségolène Royal una caja de nuestro mejor tomate de temporada. Ya tengo calculado lo que me va a costar: un paquete de 3 kilos de Raf Pintón Premium de www.soloraf.es (39,42 €), más los portes a la sede parisina de la ONG que preside, Désirs d’Avenir pour la Planète, en el número 38 de la rue du Faubourg Saint-Martin (23,86 €), suma un total de 63,28 €, que tampoco es tanto si con esto consigo enseñar algo a esta ilustre ignorante.

Como es sabido, Madame Royal se ha cubierto de gloria esta semana con sus torpes declaraciones acerca de los tomates españoles. Y lo ha hecho, para mayor escarnio, por partida doble. Todo empezó el pasado martes, cuando la que fuera candidata socialista al Elíseo puso en duda la normativa celtíbera referida a la agricultura ecológica durante una entrevista con el canal televisivo BFM: «¿Han probado esos tomates españoles que ellos llaman ecológicos? No se pueden comer. Yo sostengo que el tomate orgánico de nuestro país vecino es falso y no cumple las mismas normas que el francés».

Primera reacción de Pedro Sánchez a las palabras de su correligionaria gala: «Segolène no ha tenido la fortuna de probar el tomate español, yo la invito a venir a España a probar cualquiera de nuestras variedades de tomate y verá que el tomate español es imbatible», comentó el jueves en Bruselas el jefe del gobierno en una rueda de prensa celebrada al término del Consejo Europeo. Tarde y flojo.

Respuesta de la ex ministra: «Construyamos juntos en lugar de dejar que la competencia desleal destruya nuestra vitalidad y autenticidad rurales. Seamos transparentes en cuanto a la igualdad de normas y controles, ya que va en el interés común de la salud en Europa», ha sentenciado el viernes en su cuenta en la red social X.

¿Cuál ha sido la reacción de nuestro titular de Agricultura, Luis Planas, ante la insistencia de la veterana dirigente gabacha? Pues organizar el mismo día en el ministerio una cata de tomates españoles ecológicos aliñados con aceite de oliva extra, tras reunirse con las principales organizaciones agrarias, convocadas a la sede de Atocha tras las movilizaciones que estas han convocado pidiendo medidas de apoyo para el campo.

«Con esta degustación, van a comprobar que esas lamentables manifestaciones no solo no son ciertas, sino que podemos vanagloriarnos de lo contrario», afirmó el ministro. «Somos el segundo país en producción de la UE y quinto del mundo en producción ecológica».

¡Pobre Segolène! Siempre ha sido un poco gafe. Al poco de perder las elecciones presidenciales contra Sarkozy en 2007, la dejó plantada su compañero sentimental, François Hollande, tras casi 20 años de relación. Cuando en 2012 aspiraba a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional, contando con el apoyo tácito de su ex – recién nombrado jefe de Estado–, no pudo conseguirlo al perder en la segunda vuelta de las legislativas el escaño de La Rochelle, ique fue a parar a un disidente de su propio partido!

Las carteras ministeriales no le duran mucho: ni bajo el mandato de Pierre Bérégovoy (11 meses en Medio Ambiente), ni con Lionel Jospin (2 años en Educación y 2 años en Familia), ni con Manuel Valls (otros 3 años en Medio Ambiente). El parlamento tampoco es lo suyo –la última vez que fue elegida diputada fue en 2002– y, a pesar de su admirable currículum en la función pública, para el cual se preparó en la Escuela Nacional de Administración, su última cargo gubernamental ha sido el de Embajadora encargada de la Negociación Internacional para los Polos Ártico y Antártico (2017-2020). O sea, una broma.

¿Por qué los medios le hacen caso a esta mujer y qué sabe ella de tomates? Respondo yo mismo a ambas preguntas: 1) Por lo que fue. 2) Probablemente poco.

Para darle un poco de contexto, si han estado ustedes hibernando estos días, las declaraciones de Madame Royal llegan en plena escalada de protestas del sector agrícola en Europa. Y, en medio de este lío, la hombres y mujeres del campo galos se han puesto a bloquear autopistas al sur del Hexágono y atacar nuestros camiones de fruta y verdura denunciando lo que consideran como competencia desleal por parte de los productores españoles.

Lo explicaba muy bien David Vigarío en *El Mundo*: «Las producciones del Levante en español, sobre todo en invierno, con un clima benigno comparado con el francés, permite cultivos muy rentables a los que se les aplicado, especialmente en los invernaderos de Almería, una alta tecnología en el ahorro de agua. Así, los precios de nuestros productos son muy competitivos, mientras en el país galo luchan en invierno contra las enfermedades que se multiplican en suelos húmedos».

¿Cuál es el origen del malestar de los agricultores y ganaderos de Europa?

Pues una suma de factores: la subida de los costes de producción debida a los precios alcistas de la electricidad y el gasóleo, aumento de los impuestos y las cargas sociales, sumados a las normas medioambientales que desde el año pasado ha impuesto la UE para otorgar las ayudas al campo. «Uno de cada cuatro agricultores se han quedado sin estas subvenciones por incumplir la reglamentación», agrega Vigarío. Y de esas aguas vienen estos lodos.

En cuanto a nuestro querido tomate, para refrescar la memoria de Ségolène, diremos que se trata del fruto de una planta solanácea conocida por el nombre científico de *Solanum lycopersicum*, que es originaria del Perú, de donde lo llamaban tomatl. En el siglo XVI, los conquistadores españoles lo trajeron al Viejo Continente y castellanizaron su nombre azteca, difundiendo su consumo por toda la cuenca mediterránea. Al principio, en Europa, la creencia general era que esta especie de baya, grandota y roja, ácida y llena de jugo y de semillas, tenía propiedades venenosas o alucinógenas y sólo servía como planta ornamental. Por eso en el Midi francés la llamaron pomme d'or (manzana de oro) y de allí pasó a Italia bajo el apelativo de pomodoro.

En la actualidad, existen 9 familias botánicas del género *Lycopersicon* que se agrupan en función de su diámetro, color de la piel y otras características, siendo la *Lycopersicon esculentum* la más extendida en nuestras tierras. De las 4.000 variedades de tomates que hay en la Unión Europea, 502 de ellas se cultivan en la piel de toro, 37 de las cuales llegan con regularidad a nuestros mercados y super-mercados.

Abundante en agua, poco energético (23 calorías por 100 gramos), rico en vitaminas A, B y C, laxante y diurético, el tomate estimula el apetito y, aparte de lo indigesto de su piel, sólo tiene una pega, que a veces

es virtud: esa acidez que muchos cocinillas compensan añadiendo una cucharada de azúcar a la cocción. Asociado al aceite, la cebolla y el pimiento, el tomate está en la base de la cocina mediterránea: caponata, ratatouille (pariente cercano del pisto), exqueisada, pizza (y su prima catalana, la coca), daube, chakcouka, pà amb tomaquet, la ensalada de queso feta y los tomates rellenos griegos, la mozzarella con albahaca (y tomate, claro) o lo que a usted se le ocurra. Tiene su momento álgido de consumo en el verano, pero esa regla de la estacionalidad de los alimentos ha ido matizándose con el auge de los cultivos de invernadero y, mas recientemente, con el cambio climático.

Antaño, nos enseñaban que el estío era la mejor época para disfrutarlo en todo su esplendor, en ensaladas o sopas frías, por no hablar de ese maravilloso cóctel de aperitivo que es Bloody Mary (¡prueben a cambiar el vodka por fino de Jerez y verán!). Así, desde muy joven he aprendido que cada variedad tenía su momento y, con los primeros calores, echábamos mano del alargado Andine Cornue y el Marglobe en rama para hacer gazpachos, el Roma para freír, el Moruno de la Vega de Tajuña, el Pezón de Venus malagueño y el Mucha Miel alicantino para ensaladas... Según terminaba agosto, recurriamos a los cultivos del norte, con piezas más voluminosas y carnosas, como la Tomata riojana, el Rosado de Aretxabaleta, el Rosa de Babastro o el Feo de Tudela. Y, llegado el invierno, nos consolábamos con el Bola canario.

Durante los cinco años que residí en París, seguí aprendiendo de tomates porque los españoles no tenemos tampoco el monopolio de conocimiento en este campo. Allí me compré el libro *Tomate* (1999) de Lindsay y Patrick Mikanowski, gracias al cual me interesé por otras especies más extendidas en el Hexágono como el Marmande, el Grand Zebra, el Noir de Crimée, el Odessa, el Coeur de Boeuf, el Black Prince, el Principe Borghese o el Double Rich, algunas de las cuales se ven ya habitualmente en la península. Michel Bras me enseñó a amar la variedad Cereza Barbaniaza, Yves Camdeborde el Monte Athos y Alain Passard el ropreco de origen transalpino, que cultivaba en sus huertos del Loira y de Normandía y que podíamos encargarnos para casa vía internet.

Yo siempre he estado muy orgulloso de nuestro RAF, también llamado Pata negra, pero en aquel periodo parisino ningún profesional a orillas del Sena o en Provenza —donde solíamos veranear— había oído hablar del tal hallazgo almeriense, cuyo acrónimo significa Resistente Al Fusarium (un micro-hongo altamente contaminante), de carnes apretadas y sabor dulcísimo que no tiene rival entre los meses de febrero y mayo. Aprendí a disfrutarlo y a distinguirlo de las imitaciones de variedades híbridas gracias al profesor de Anatomía Patológica y gran gourmet Raimundo García del Moral,

que en febrero de 2009 escribió un artículo magistral sobre el tema: «el RAF es el producto hortícola más grandioso del sureste andaluz», sentenciaba. «Sobre él existen atractivas leyendas, descripciones interesadas, revelaciones maliciosas, fallidas catas de los numerosos sucedáneos existentes, desinformación a raudales e innumerables comparaciones con los tomates del huerto familiar, que, como no, para casi todos son mejores pues sensorialmente acabamos viviendo más del olor de nuestros recuerdos que de la monótona realidad diaria».

Raimundo me enseñó que el mejor RAF es de aspecto achatado, cuello asurcado con hombros de color verde negruzco y cuerpo de verde a rojo-anaranjado según su estado de madurez. Al corte, es carnoso y no libera agua. En boca, muestra una deliciosa textura crujiente —rasgo inexistente en imitadores como la Marmandina o el Tigre verde— e intenso sabor agridulce.

«La implantación del tomate RAF en Almería comenzó a finales del siglo XX cuando las infecciones por hongos impedían la adaptación de las variedades tradicionales de tomate a las condiciones de alta humedad existentes dentro de los invernaderos», prosigue García del Moral. «Por entonces, algunos agricultores de la zona conocieron que la empresa francesa de

semillas Clause-Tezier había desarrollado por genética tradicional de cruces entre razas un tipo de tomate de la variedad Marmande que era Resistente A Fusarium, de ahí las siglas RAF acuñadas para designarlo... Distinguir entre el tomate RAF genéticamente intacto y la variedad híbrida no es fácil pues poseen características morfológicas externas similares. La prueba del algodón es la cata, ya que el híbrido tiene menos sabor y muestra textura menos crujiente que el verdadero Pata negra».

Cuando un tomate sale bueno, no hay nada mejor que comerlo solo, al natural, realzado por un hilo de aceite de oliva virgen extra y una pizca de flor de sal. Espero que Segolène aprecie mi envío y le haga descubrir la bondad de nuestros productos del huerto y de este en particular. Pensando en ella, me viene a la cabeza una copla andaluza algo soez, de la cual solo reproduciré el principio (busquen ustedes la continuación): «Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en su mata»... Dedicado a Madame Royal y a los políticos en general, que siempre nos meten en sus líos.

Opinión

Lo de 'El País'

«Se ha puesto una cabecera de prestigio en Europa y América al servicio humillante del más indigno y sectario gobierno de las democracias occidentales»



Sede del diario 'El País', en Madrid. | Wikimedia Commons.



Fernando Savater

@Savater

Publicado: 04/02/2024

En realidad, no pensaba escribir nada sobre mi despido del periódico en el que he escrito los últimos cuarenta y siete años. Es un incidente laboral de los que suceden tantos en nuestros días, en mi caso afortunadamente sin tintes especialmente dramáticos. La empresa me lo dio y la empresa me lo quitó, está en su derecho, aunque bien es verdad que la empresa que me lo dio se parece poco a la que me lo acaba de quitar. Pero en fin, qué le vamos a hacer, tampoco hay que dramatizar: gracias

por los buenos ratos y a otra cosa. Como dijo alguien más grande que yo, «al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito». O ni eso, estamos en paz. Siempre he procurado (aunque frecuentemente sin éxito) practicar el antiguo lema de Benjamin Disraeli que encarnó perfectamente la añorada reina Isabel II: never complain, never explain. Hoy voy a recurrir a él aunque sólo a medias, es decir no me quejaré pero voy a intentar explicar lo ocurrido desde mi punto de vista. Para las demás quejas y excesivos halagos tienen a su disposición los amables textos de tantos amigos y lectores fieles que han lamentado sentidamente la pérdida de mi columna semanal. Agradezco más de lo que puedo decir sin ponerme empalagoso su afecto y su cercanía: el corazón del hombre bien nacido es una catedral en que a veces suena magnífico el órgano del agradecimiento y yo hace varios días que estoy escuchando su tocata y fuga.

Ante todo quiero disipar un malentendido, que puede derivarse de la carta de la directora Pepa Bueno justificando mi despido. Yo no he atacado a El País por una especie de odio sobrevenido, una antipatía invencible que me ha enfrentado con mi periódico de toda la vida. Después de casi medio siglo de colaborar en él es parte de mí mismo. Para bien y para mal, en sus aciertos y en sus miserias, conozco El País por todas sus costuras, tanto como

cualquiera de sus más conspicuos colaboradores y desde luego mejor que la mayoría. Si lo critico a veces de manera acerba es para defenderlo de los que hoy lo tienen secuestrado, para recobrarlo de manos de quienes lo han malbaratado.

Creo que el único y verdadero defensor del lector de El País soy yo, porque conozco lo que el periódico fue gracias entre otros muchos a mí y no puedo resignarme a lo que ahora es. Creo que no idealizo (o al menos no demasiado) El País de los orígenes. Un diario de la democracia del 78, tan denostada por los imbéciles que no llegaron a tiempo para boicotearla, un firme pilar de la transición como el Rey Juan Carlos, como Suárez, como Fraga, como Carrillo, como tantos españoles que en cuanto tuvieron ocasión y sin entrenamiento previo pasaron de peones de una dictadura a ciudadanos. Entonces no reinaba el sectarismo obscuro y obtuso actual, salvo algunos casos abominables como Fuerza Nueva o el FRAP que sólo eran venerados por los psicópatas (cuyos vástagos pululan aún entre nosotros hoy). No sólo es que hubo mejores políticos, más equilibrados o más escarmentados que los de ahora, sino sobre todo que tuvimos mejores ciudadanos, no obsesionados por ser de izquierdas o de derechas sino españoles capaces de comprender que la nueva y necesaria democracia española se haría con franquistas y comunistas, con

anarquistas y veteranos de la División Azul. La hemiplejía política vino bastante después, alentada por los excrementos inasimilables de la democracia como ETA y el carlismo-separatismo. Puede que la promovieran a veces El Alcázar o Mundo Obrero (creo que ni eso) pero desde luego nunca El País.

Desgraciadamente la política española ha ido degenerando desde los tiempos de la transición democrática. Por una parte no ha dejado de aumentar el peso de los partidos separatistas, requeridos por las dos fuerzas principales para lograr las mayorías absolutas necesarias para su concepto (a mi juicio equivocado) de gobernabilidad. Por otra, desde tiempos del nefasto Zapatero se ha vuelto a una bipolaridad política cargada de revanchismo guerra civilista que poco tiene que ver con la armonía de la que surgieron los acuerdos constitucionales. La izquierda ha renunciado a sus clásicos proyectos universalistas, herederos más o menos fieles de la Ilustración, para sustituirlos por charlotadas identitarias que reivindicán el victimismo de minorías cada vez más aberrantes. El único propósito común izquierdista es impedir que vuelva a gobernar la derecha, o sea un proyecto inequívocamente antidemocrático. Ya no son de izquierdas sino siniestros.

«No sólo hay que señalar los desafueros de Sánchez y sus corifeos, sino también a los medios de comunicación sin los que no hubiera logrado conseguir el apoyo de mucha gente»

No hace falta que insista en el tema porque hoy está bien a la vista: con Pedro Sánchez estamos bajo la presidencia de un mentiroso inmoral que favorece la desigualdad entre ciudadanos (amnistía para delincuentes cuyo voto le interesa, trato de favor al dogmatismo «progresista» en cuestiones de historia, sexo, perspectiva cultural, etc...), ataques a la estructura misma de la independencia judicial y la sustracción descarada de puestos administrativos relevantes para distribuirlos entre los más adictos, por incompetentes que sean. Lo más infame de la fauna política –la hez y el martillo, por decirlo pronto- los cómplices exultantes del terrorismo, los separatistas fanáticos que sienten purgaciones cuando oyen mencionar a España, se han convertido en dueños interesados de la gobernabilidad del país que más detestan. Nunca ha estado más amenazada no ya la integridad democrática o la prosperidad social de esta vieja nación, nuestra España, sino su simple supervivencia.

Y en esta situación dramática aunque llena de rasgos bufonescos, El País se ha convertido en el soporte propagandístico y el justificador ideológico de Pedro Sánchez. Hemos cambiado aquel valiente y necesario editorial El País con la Constitución escrito por Javier Pradera a raíz del golpe de Estado de Tejero y compañía en 1981 por la actitud adulescente y cómplice de El País con Pedro Sánchez actual, cuando la putrefacción política es aun más grave que entonces. No es cuestión sencillamente de que el periódico ayer progresista y crítico hacia derecha e izquierda se haya convertido en portavoz gubernamental contra la supersticiosa amenaza de la extrema derecha, sino que se ha puesto una cabecera de prestigio en Europa y América al servicio humillante (pero para algunos rentable) del más indigno y sectario gobierno de las democracias occidentales. Ver a escritores, profesores y periodistas (rebosantes de feminismo, claro) con envidiable reputación colaborando en esta deformación de lo que ha sido una empresa intelectual de la mayor altura europea es sencillamente bochornoso: yo desde luego no me resigno a participar como los otros y encogerme de hombros. No sólo hay que señalar los desafueros de Sánchez y sus corifeos sino también a los medios de comunicación sin los que no hubiera logrado conseguir el apoyo de mucha gente que, sin gustarle ni mucho menos, se resigna a él.

En la justificación de mi despido se menciona que he despreciado a algunos de mis compañeros del periódico. No a todos, desde luego: nada puedo ni quiero decir contra Félix de Azúa, Antonio Elorza, Juan Luis Cebrián y algunos otros a los que no nombro para no infamarles con mi aprecio. Sólo diré que son muy, muy poquitos. En lo tocante a despreciar, sigo siempre el consejo de Chateaubriand cuando decía que hay ocasiones en las que debemos distribuir nuestro desprecio con mucha parsimonia, porque hay demasiada gente que lo merece. Por citar a uno de los agraciados, mencionaré a Íñigo Domínguez, que el pasado domingo se descolgó con una despedida en la que me compadecía por tener que buscar ahora acomodo en algún medio de la derecha, todos tan unánimes y predecibles. ¿Se puede tener más suficiencia? ¿Pero tú de dónde sacas, pa tanto como destacas? Me dicen que es un pobre hombre y lo creo sin esfuerzo, porque todos los mortales lo somos: la única diferencia es que algunos se limitan a su pobreza y otros quisiéramos también ser hombres.

Entre los lectores ha habido tantos testimonios de apoyo que compensan sobradamente lo demás. Bastantes se han dado de baja en su suscripción al El País, que conservaban nostálgicamente como el proverbial rosario de mi madre de la canción. Uno de ellos, chairman de un

departamento universitario de Nueva York, se ha dado de baja en la suscripción y ha enviado esta carta «a ver si tienen la decencia de publicarla» (la respuesta es negativa, claro): «En los 90, comprar El País en Vizcaya ‘te exponía a cosas’. A cambio sus editoriales ofrecían claridad y firmeza ante la barbarie. Ahora, me es doloroso, asombroso e injustificable el pasteleo con el nacionalismo, y el fervor sanchista rayando el fanatismo de los editoriales. Adiós. ¡Savater, no caminas solo!». Ya lo sé, gracias, por eso voy a seguir caminando. Podrán leerme cada domingo aquí y puede que en algún otro sitio. Ya les iré diciendo. Ustedes no se cansen ni abandonen lo que los bribones llaman «fachosfera», porque de ahí saldrá la patada que vamos a darles.

Opinión

Un Gobierno contra la ley

«Con buena ingeniería legislativa y la ocupación de las instituciones, han convertido la Constitución en un simple adorno»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Antonio Caño
[@Antonio_Cano](#)

🕒 Publicado: 05/02/2024

Tenemos un Gobierno al que le estorba la ley. Ha dado pruebas sobradas de ello y parece dispuesto a dar muchas más. Caídas ya todas las caretas, curada de espantos la sociedad, que obedece de momento la sugerencia del poder de cobrar la pensión y no meterse en política, el Gobierno está decidido a dirigir el país por encima de las leyes, convirtiendo en mera fachada el orden constitucional.

El Gobierno ha entendido que, con una buena ingeniería legislativa, la ocupación de las instituciones y la complicidad de algunos medios de comunicación, todo cabe en la Constitución, que es tanto como decir que la Constitución no vale para nada.

Casi sin darnos cuenta, nos han cambiado el sujeto de la soberanía, que ahora reside, según proclaman a diario los ministros, en el Parlamento y no en el pueblo español. Con mayoría parlamentaria se puede hacer todo, según los exégetas del nuevo régimen. Cada ley que se interponga en los deseos del Ejecutivo, se suprime o adapta a las nuevas necesidades, aunque esa modificación transgreda la Constitución, los convenios europeos o la opinión de los españoles. Por lo visto, los españoles hablan únicamente cuando votan a sus representantes en el Congreso; el resto del tiempo callan y acatan.

De esta forma, se ha violentado el Código Penal para adaptar dos delitos fundamentales -el de sedición y el de malversación del dinero público- al gusto de los delincuentes del 1 de Octubre y a los intereses de sus actuales valedores, el Gobierno de la nación. Se ha quebrantado la decisión expresa de la asamblea constituyente de que la posibilidad de una amnistía no estuviera recogida en nuestra Carta Magna. Y ahora, cuando algunas piezas del Estado de derecho reaccionan para protegerlo, el Gobierno busca nuevas vías para que la justicia y la ley no se interpongan en sus propósitos.

No sé cómo se denomina un sistema político de esta naturaleza, pero desde luego no es una democracia. O, al menos, no es una democracia como la que conocimos, fundamentada en el imperio de la ley.

El Gobierno ha dado motivos de sobra para obligarnos a sospechar que, antes del final de la legislatura, procederá a un reajuste de nuestro modelo territorial, sin respetar las exigencias constitucionales al respecto. Encontrará, con seguridad, los recursos legislativos para hacerlo, la mayoría parlamentaria para aprobarlo y el respaldo mediático para justificarlo. Es de temer, igualmente, que cuando esta legislatura concluya el deterioro institucional sea tan grave que pueda estar en riesgo la opción efectiva de una alternancia en el poder. Peor aún, aún produciéndose un relevo en el Ejecutivo, el próximo Gobierno tendría que ser muy generoso para renunciar al esquema de poder absoluto que el Gobierno actual dejará a su disposición.

«Es de temer que cuando esta legislatura concluya el deterioro institucional sea tan grave que pueda estar en riesgo la opción efectiva de una alternancia en el poder»

España está en riesgo cierto de convertirse en una democracia fallida. No tiene porqué parecerse a ninguno de los modelos autoritarios que tengamos en mente, pero sí puede dejar de ser el sistema que garantiza los derechos ciudadanos, el equilibrio entre los poderes y la igualdad ante la ley. Incluso la libertad de expresión se ve limitada por el clima de intimidación impuesto contra cualquier opinión que pueda identificarse con la fachosfera. En ausencia de esas garantías, los abusos que ya sufrimos, serán mayores y más difíciles de combatir.

Ignoro en qué puede desembocar el camino emprendido por este Gobierno. Algunos creen que el Estado de derecho goza aún en España de recursos suficientes para poner freno a esta deriva. Otros confían en que las instituciones europeas pondrán orden, en última instancia. Pensando en los precedentes de Hungría y Polonia, tengo mis dudas. Pero lo que es indiscutible es que el Gobierno ha puesto el destino de España en manos de aliados que no creen en nuestra democracia y ven ahora una oportunidad única de acabar con ella.

Opinión

El escorpión y la rana

«Nada le importa más a Puigdemont que humillar a quien se supone que representa el Gobierno de España. Es una victoria superior a la independencia»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Félix de Azúa

Publicado: 03/02/2024

Pues naturalmente, ¿qué te imaginabas, pobre hombre? Sánchez parece agraviado porque Puigdemont le ha tumbado por enésima vez sobre la lona. Este tipo no sabe de qué va el asunto. Se lo conté a ustedes hace una semana, si no recuerdo mal, lo más importante que ha dicho Puigdemont sobre la política española es aquella célebre frase: «Sánchez va a mear sangre». Y eso es lo que está haciendo. Nada le importa más que humillar a quien se supone representa

el Gobierno de España. Es su triunfo. Una victoria superior a la independencia que sabe muy bien es imposible de conseguir, no por Sánchez, sino por Europa. Pero cada vez que tumba al pobre monigote de un manotazo los proto fascistas catalanes irrumpen en aplausos y descorchan botellas de cava. Això és una dona!, bramaban ante la Ferrusola.

Hay que volver a explicarlo. Sánchez no conoce Cataluña y por lo tanto no sabe nada de Gerona. Verán ustedes, los de allí estamos al cabo de la calle desde hace un siglo. Cataluña, ese invento de Pujol, se compone de dos partes, por un lado está Barcelona y su provincia que reúne a unos seis millones de habitantes. Y por otro la Cataluña rural, la agraria, que suma otros dos millones, más o menos. Tractorlandia, en definición de Boadella.

Los de la Cataluña rural sólo tienen una agrupación fuerte que es la de Gerona, sobre todo en su parte costera. Y Puigdemont era el alcalde de Gerona. A ese poder hay que añadir el de los obispos y abades catalanes, todos ellos separatistas porque han sido elegidos por los separatistas, conscientes del peso que tiene la religión entre los carlistas.

«El voto agrario, en Cataluña, tiene un peso diez veces superior al voto barcelonés. Ese fue el triunfo de Pujol y el de la xenofobia»

Los gerundenses odian a los de Barcelona porque son ellos los que les han hecho ricos. Como cuenta muy bien Pla, fueron numerosas familias barcelonesas las que a comienzos del siglo XX compraron terrenos y masías de aquella zona y construyeron o repararon algunas viviendas admirables. Los campesinos de Gerona vendieron sus propiedades por cantidades fabulosas y se hicieron ricos. Luego llegó el turismo, también industrializado desde Barcelona. El odio de los gerundenses es comprensible. Nada se perdona peor que un favor, una gracia, una concesión que te hace rico.

Durante décadas los de Gerona llamaban a los de Barcelona els pixa pins, los mea pinos. Se observa que los separatistas gerundenses tienen un problema con la orina. Eso sí, el voto agrario, en Cataluña, tiene un peso diez veces superior al voto barcelonés. Ese fue el triunfo de Pujol y sigue siendo el triunfo de la xenofobia separatista. A medida que la Cataluña agraria aumenta su fuerza, en la misma medida disminuye la de Barcelona, ciudad híbrida, llena de gente que se sabe española y por lo tanto muy desafecta al

régimen. Motivo por el cual buena parte de la burguesía barcelonesa está a favor de los separatistas y de Tractorlandia por pura xenofobia.

Olvidan que, si algún día Pujol y Puigdemont ganaran su máxima apuesta, es muy probable que cambiaran la capital a Gerona. En cierto modo sería el cumplimiento de un sueño centenario, porque ninguno de los dos se siente en absoluto un barcelonés. Y esta es la razón por la que los socialistas catalanes son tan nacionalistas como Pujol y Puigdemont, aunque lo disimulen. Saben que siempre serán subalternos. Y lo son, pero no se quieren perder las calçotadas.

Opinión

Impunidad de autor

«El sanchismo maniobrará hasta donde sea menester para que el independentismo confeccione al prófugo la impunidad que éste necesita»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Guadalupe Sánchez

@Proserpinasb

Publicado: 03/02/2024

La a impunidad es la manifestación más evidente de la injusticia y la materialización más extrema de la desigualdad. Premia al delincuente y castiga a sus víctimas. Promueve el crimen y desincentiva el respeto a la legalidad. Es el rostro más abominable de la discriminación y del clasismo.

La impunidad nunca da la cara y se camufla bajo distintos ropajes institucionales: la amnistía, el indulto o el derecho de gracia. Son los tres caballos de Troya a los que recurre el poder para desprestigiar las sentencias, borrar sus pecados y legitimar su violencia.

Pero la impunidad es, sobre todo, un enorme engaño al pueblo, porque los impunes jamás retornan paz o concordia. Al contrario, tratan con menosprecio a quienes les toleraron que sortearan el cumplimiento de las leyes y se exhiben con beligerancia ante las instituciones democráticas cuya respuesta consiguieron eludir.

El socialismo ha convertido la gobernabilidad de nuestro país en un bazar público en el que se amnistían gravísimos crímenes a cambio de apoyos parlamentarios, con la particularidad de que son los agraciados —y no quien ejerce el derecho de gracia— los que diseñan su propia impunidad antes de adquirirla. Si la impunidad es ya de por sí infame, la que está gestando el Gobierno es tan bochornosa como inaudita: a los criminales, condenados o presuntos, no se les exige disculpa o acto de contrición alguno. Es más, ministros y activistas mediáticos los acompañan en los agravios a la judicatura mientras miran hacia otro lado cada vez que los líderes del procés aseguran que lo volverán a hacer.

El PSOE, otrora sastre y corresponsable de la confección de la Constitución española, ha regalado al independentismo catalán las telas para que se confeccione el traje a medida de su propia amnistía: desórdenes públicos, malversación o terrorismo. Pero el suntuoso disfraz de convivencia se desvaneció este pasado martes, dejando en cueros a militantes, activistas y analistas de medio pelo empeñados en negar lo que muchos llevamos advirtiendo desde las elecciones generales: que la amnistía tiene nombre propio y que su fin no es otro que el de procurar total impunidad a Carles Puigdemont. El resto de inculpados o condenados vinculados al independentismo no importan, son un mero accesorio, la comparsa con la que disimular que en España, otra vez, se esté legislando *ad hoc*.

«Sánchez ha demostrado mucha más lealtad hacia sus socios nacionalistas que a la palabra dada a sus propios votantes»

La desconfianza evidenciada por Junts votando en contra de la amnistía confirma que no las tienen todas consigo respecto a la solidez de las costuras del traje de la impunidad. De ahí la exigencia de extenderla al terrorismo en toda la amplitud del término —sin los matices sobre las «vulneraciones de derechos humanos» ideados por el nefasto Bolaños— o incluso a un posible delito de traición que pudiera derivarse de la trama rusa.

No es que los procesistas teman a otro cambio de opinión del presidente Sánchez, que desde que llegó al cargo ha demostrado mucha más lealtad hacia sus socios nacionalistas que a la palabra dada a sus propios votantes. Saben, como yo, que su única línea roja es la de la marca del bañador. De quien desconfían es de la magistratura porque, si bien es cierto que Pedro les ha dado buena muestra del poder que ejerce sobre la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, la justicia no parece presta a amilanarse o corromperse. Por eso no es extraño ver a gente cuyos conocimientos de derecho son escasos, cuando no nulos, cuestionar abiertamente la labor de los jueces que investigan los actos de Tsunami Democràtic o la injerencia rusa. Incluso se atreven a tildarlos de prevaricadores.

Por no hablar de lo llamativo que resulta que todos estos mamporreros del socialismo patrio, cuyo sustento y posición en los medios dependen de su capacidad para agrandar al poder hasta la náusea, muestren ahora reparo en que se diriman las responsabilidades por los tejemanejes del secesionismo con el régimen de Putin para desestabilizar a España y a la UE. Es el mismo hatajo de hipócritas que, tras la invasión rusa de Ucrania, exhibían la bandera de este último país en sus perfiles y se mostraban deeply concerned por la desinformación e influencia ejercida por los rusos en algunas democracias occidentales

con el objetivo de promover gobiernos afines. Deberían enarbolar en sus redes la única bandera en la que creen: la del PSOE. Periodismo servil y deshonesto tan responsable de la degradación democrática de nuestro país como el mismísimo gobierno.

«El PSOE podría diseñar una nueva reforma que redefine el terrorismo y la traición con el objetivo de evitar su aplicación a Puigdemont»

Pero el rechazo a la proposición de ley de amnistía en el Congreso no supone un adiós, sólo un hasta luego. El sanchismo maniobrará hasta donde sea menester para que el independentismo confeccione al prófugo la impunidad que éste necesita y no necesariamente disfrazándola de amnistía. Al igual que hicieron con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, el PSOE podría diseñar una nueva reforma punitiva que redefine el terrorismo y la traición con el objetivo declarado de evitar su aplicación a Puigdemont.

Nuestra legislación penal está plagada ya de los nombres y apellidos de quienes la han retorcido para la consecución del privilegio de la impunidad. Cabe ahora preguntarse si una democracia que no dispone de resortes para impedir tales aberraciones ante la mirada impasible de los ciudadanos es digna de ser considerada como tal.

Opinión

Tractores que roturan Europa

«Es hora de diseñar una estrategia alimentaria europea que aúne sostenibilidad, producción, renta justa para los agricultores y despensa para los ciudadanos»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Manuel Pimentel

[@mpimentelsiles](#)

Publicado: 06/02/2024

Los tractores han salido a la calle en varios países europeos. Nunca se habían manifestado de forma tan masiva y extensa. Alemania, Francia, Bélgica y un rosario de naciones europeas han temblado bajo la inesperada furia de agricultores y ganaderos. ¿Qué les pasa?, se preguntan los inadvertidos. Tractoradas en Europa que pronto llegarán España. **¿Por qué lo hacen?, se repite atónita una sociedad**

eminentemente urbana, asombrada ante la fuerza y repercusión de cortes y manifestaciones. No los entienden. Si los precios de los alimentos han subido una barbaridad estos dos últimos años –se dicen-, los agricultores habrán ganado muchísimo. ¿Por qué protestan, entonces? Y, encima, la PAC –la Política Agraria Comunitaria– los riega con miles de millones de euros por no hacer nada, ¿cómo son, entonces, tan desagradecidos?

Los agricultores, solos y abandonados, salen a la calle sin otro apoyo que sus asociaciones profesionales. Y hacen bien. Sus protestas están más que justificadas y no deben politizarse. Se juega su supervivencia y, visto lo visto, no deben esperar más apoyo que la fuerza de sus manifestaciones, razones y argumentos. Alimentan a una sociedad que los desprecia y arruina sin ser consciente del riesgo de desabastecimiento que su desatino puede provocar.

Pero vayamos por partes. ¿Por qué protestan los agricultores europeos? No resulta fácil el simplificar las motivaciones de estas manifestaciones, pues muchas son las geografías y más variadas aún sus producciones y agriculturas. Pero dos son las palabras que pueden resumir las causas múltiples que impulsan a esos productores que, abandonando sus tierras y granjas, colapsan las grandes urbes decisorias de las

políticas que los asfixian. ¿Cuáles son estas dos palabras? Pues hartazgo y desesperanza. Desesperanza ante su progresiva ruina, hartazgo ante el descrédito y persecución por parte de una sociedad que no valora su trabajo como productores de alimentos y que los considera, tristemente, como enemigos recalcitrantes del medio ambiente.

Despreciados, acosados, controlados y arruinados, han salido a la calle para decirnos que se mueren, que quieren vivir, que desean alimentarnos y trabajar en paz, que precisan de una digna rentabilidad, que se ahogan en burocracias, papeles y cuadernos digitales, que necesitan que les respetemos y que, por favor y sobre todo, no les persigamos más. Tarde o temprano, la explosión tenía que producirse, y lo ha hecho en un momento oportuno, con unas elecciones europeas en el horizonte inmediato. Exteriorizan su rabia acumulada, sin alcanzar a compartir las reivindicaciones concretas que pretenden. Esas, ya llegarán. Pero era preciso, por el bien de todos, que dijeran basta ya y los han hecho con el estruendo de sus tractoradas.

En efecto, el inicial malestar difuso fue adquiriendo dramatismo tras los desastres sufridos durante décadas. Por eso han explotado, sin que hayan perfilado sus peticiones y reivindicaciones. No

aguantaban más y han salido para gritar al universo su angustia esencial. Su hartazgo y desesperanza se abonan por tres grandes familias de razones: primero, por las pérdidas económicas; segundo, por el desprecio y desconfianza con la que son tratados y, por último, por una patética PAC con su rosario de burocracias que los aplasta y controla.

«Prácticamente todos sus sectores y especialidades son considerados como enemigos del medio ambiente»

En efecto, la bajísima rentabilidad media de las explotaciones agrarias, cuando no sus abiertas pérdidas, los conduce a la ruina. Es cierto que algunos cultivos son rentables, incluso unos pocos muy rentables, pero son la excepción que confirma la regla. A los agricultores, ganaderos y pescadores no les salen las cuentas y ven, con temor, como, año a año, los números rojos y las deudas se incrementan. Y, por si fuera poco, la sequía ha reaparecido para golpearlos con fuerza. Por otra parte, están hartos, agotados, de sentirse despreciados, minusvalorados, perseguidos, desprestigiados. Esta consideración moral es muy importante, pues prácticamente todos sus sectores y especialidades son considerados como enemigos del medio ambiente, sin reparar en que, precisamente, ha sido el mundo rural –que no el urbano– el que nos ha legado la naturaleza que disfrutamos y que, eso sí, debemos cuidar y mimar.

Y, como culmen del despropósito, una patética PAC obsesionada por controlar todas y cada una de las faenas de los agricultores, de los que desconfía y a los que somete al yugo de un cuaderno digital que, en plan Gran Hermano, todo lo controla y sabe. En líneas generales, estos son los ingredientes básicos de su grito desesperado, del que también nos llega el eco distorsionado de competencias desleales y dumpings comerciales, probablemente más como chivos expiatorios que como causas reales de su situación. No entraremos en las fantochadas francesas contra nuestras producciones, por no desviarnos del objetivo de nuestros razonamientos.

Y, como culmen del despropósito, una patética PAC obsesionada por controlar todas y cada una de las faenas de los agricultores, de los que desconfía y a los que somete al yugo de un cuaderno digital que, en plan Gran Hermano, todo lo controla y sabe. En líneas generales, estos son los ingredientes básicos de su grito desesperado, del que también nos llega el eco distorsionado de competencias desleales y dumpings comerciales, probablemente más como chivos expiatorios que como causas reales de su situación. No entraremos en las fantochadas francesas contra nuestras producciones, por no desviarnos del objetivo de nuestros razonamientos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo hemos reflexionado en artículos y en el ensayo La venganza del campo (Almuzara). La abundancia de alimentos y sus precios extraordinariamente bajos por décadas, motivados por la globalización y la concentración de la distribución, hizo que la alimentación resultara tan barata que dejara de ser un problema para la sociedad occidental. Se despreocupó de ella y de sus productores, convencida, como estaba, de que la comida aparecía por generación espontánea en los anaqueles de los supermercados. Mientras se producía ese desapego entre la ciudad y el campo, los nuevos y positivos valores medioambientales y de sostenibilidad se convirtieron en una prioridad, al punto que los agricultores, ya despreciados, pasaron a ser considerados, progresivamente, como enemigos del medio ambiente. Al urbanita que salía al campo le molestaban regadíos, granjas, silos, embalses, cercas y cualquier infraestructura productiva. Quería el campo para pasear y esos insanos, peligrosos y parásitos agricultores se lo impedían. Y como las ciudades mandan, el espíritu de las leyes siguió su hálito.

«La actual PAC fue escrita con inspiración y guion de crónica de suicidio anunciado»

¿La agricultura fue sentenciada a ser sacrificada ante el altar expiatorio del insaciable dios ambiental. Nadie pareció reparar en que, sin agricultura, o se come muy caro o, directamente, no se come, lo que no parece ni sabio ni recomendable, desde luego. Y la PAC siguió el mismo camino redentor, más preocupada del discurso verde que de la despensa de sus ciudadanos. Y, así, de manera suicida, decidió externalizarla. Que otros produzcan los alimentos que precisamos, parecen decirnos, que el campo europeo es para el solaz y recreo de los urbanitas, que para eso nos votan. Irresponsables. ¿Cómo dejar la llave de nuestra despensa en manos de otros en estos tiempos de conflictos y guerras? La actual PAC fue escrita con inspiración y guion de crónica de suicidio anunciado. Todos lo sabían, pero nadie hizo nada para impedirlo, hasta que los agricultores gritaron, con el altavoz de sus tractores, que hasta aquí habíamos llegado.

Lo ideal es conseguir un razonable y sostenible equilibrio entre medio ambiente y producción agrícola. Sin embargo, Europa optó por confrontarlas y su apuesta ambiental se hizo contra la agricultura, que no junto a ella, lo que hubiera sido deseable. Debemos aspirar a una naturaleza hermosa y a una despensa llena como objetivo compartido. Pero no, no fue así, y se decidió castigar sin más a las producciones agrarias.

Alguien no cayó en la cuenta de que, si se limitaban cosechas y superficies de cultivo, si se restringían y encarecían las técnicas de cultivo, si se aplastaban en papeles y junglas administrativas, si se limitaban regadíos e insumos, al final se producirían muchos menos alimentos, lo que los encarecería extraordinariamente. Moraleja, lo que bautizamos como venganza del campo, llegó ineludiblemente. La cesta de la compra experimentó una subida que no ha hecho sino comenzar, sin que parezca, por ahora, tener techo. Y no lo tendrá mientras permanezca el acoso a la producción agraria con la desgraciada intensidad que hasta ahora hemos conocido.

Las tractoradas resultaban inevitables. Los agricultores venderán cara su piel, lucharán por no morir. Pero, por ahora, no encontrarán demasiado apoyo ni calor en una sociedad sobrealimentada. Sólo cuando la cesta de la compra se ponga a precios prohibitivos, se verán reconocidos y mimados. Ojalá esa venganza del campo no llegue a consumarse con toda su crueldad, hacen bien los agricultores en advertir de ello a la sociedad con sus gritos y tractores.

La política agraria europea tiene que cambiar. El sector primario debe garantizar a su población una alimentación variada, suficiente, sostenible, sana y, encima, a un precio razonable. Pero hoy, desgraciadamente, ni está ni se le espera en

estas lides. La PAC posee ya una larga historia. Fue una de las primeras políticas comunes europeas, sobre todo a impulso de Francia. Primero estimuló la producción, para garantizar la alimentación en la Europa devastada de la posguerra. Tuvo tal éxito que generó excedentes, las famosas montañas de mantequilla. Esa realidad la hizo virar cuando, además, la apertura de fronteras merced a la globalización, hizo que los precios de mercado, ya liberalizados, se desplomaran. Se decidió entonces apostar por unos pagos directos para garantizar la renta agraria, de manera desligada de la producción. De hecho, obligaba a barbechos e incentivaba el abandono de tierras y la repoblación forestal. Fue una política bien intencionada, necesaria para mantener la renta de los agricultores, pero que resultó mal explicada. La población escuchaba aquello tan demagógico de que a los agricultores se les pagaba por no producir, lo que ahondó su descrédito.

«La agricultura europea, hoy en día, se encuentra por completo intervenida»

La PAC continuó avanzando y, con cada nuevo paso, el intervencionismo se incrementó y el papeleo se complicó. Y en esas estábamos cuando, en la última reforma, los valores ambientales se priorizaron frente a los puramente agrarios.

Los sesudos autores de la PAC hicieron suyo el falaz imaginario del agricultor como cuidador del medio ambiente, mientras lo controlaba con desconfianza, al considerarlo como sospechoso habitual. La agricultura europea, hoy en día, se encuentra por completo intervenida. Los cultivos, su rotación y sus faenas se deciden en profusos reglamentos comunitarios y no en el tajo ni en la besana. Ningún otro sector está tan observado y controlado por complejos cuadernos de campo como lo están los agricultores. El artefacto burocrático de la PAC parece diseñado por un demente intervencionista al que los agricultores no le caen nada bien, por lo que decidió castigarlos.

Por todo ello, hacen bien los tractores en salir a las calles, en un momento oportuno, además. Es la justa hora de hacerlo, ya que hasta ahora nadie les hizo caso. Tenemos elecciones europeas que traerán nuevas políticas que, ojalá, comprendan la imprescindible necesidad de garantizar de manera sostenible, eso sí, la despensa de los europeos. Producción agraria y medio ambiente deben caminar de la mano, y no confrontados, tal y como se ha tratado de vender falsa e interesadamente hasta ahora.

Apoyamos las manifestaciones de los agricultores. Hacen bien en gritar su desesperanza. Pero pronto, tendrán que sentarse a negociar y tener bien claro que es

lo que piden con exactitud. Si sólo reclaman más subvenciones, no serán bien entendidos por una sociedad que desconfía de ellos. Es hora de diseñar, de crear de manera compartida una estrategia alimentaria europea que consiga aunar sostenibilidad, producción agraria, renta justa para los agricultores y despensa sana, variada y a precio justo para los ciudadanos. ¿Se conseguirá? Esperemos que sí. Pero mientras esto ocurre, que los tractores roten con sus cláxones el asfalto donde se cuecen esas absurdas leyes que hasta ahora los asfixiaron.

Opinión

Los soberanistas nos quieren robar

«Prepararán el camino para romper la unidad de la hacienda española y la política redistributiva del Estado. ¿Tierra firme? No. Tierra quemada»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Juan Francisco Martín Seco

Publicado: 06/02/2024

Son tantas las cesiones que Sánchez está haciendo a los golpistas catalanes que unas empujan a las otras para ocupar un puesto en la primera línea de la actualidad. En esa competición hay una que últimamente ha quedado un poco rezagada, pero que estuvo presente en ese acuerdo secreto que firmaron el día 10 de enero en el Congreso y que fue el precio pagado a Junts para que permitiese la aprobación de al menos dos de los decretos leyes presentados.

Se trata de una vieja pretensión. La publicación de las llamadas balanzas fiscales. En realidad, constituye una petición instrumental porque se orienta a que, una vez amañados convenientemente los datos, el nacionalismo catalán pueda desarrollar toda su vis victimista. En la actual coyuntura esta reclamación es tan solo la antesala del verdadero objetivo: conseguir para la Generalitat catalana un estatus financiero similar al que tiene el País Vasco.

Con el concepto de balanza fiscal se refieren al resultado, positivo o negativo, entre lo que cada comunidad autónoma contribuye al erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene del Estado mediante las infraestructuras, las prestaciones y los servicios públicos.

Desde el punto de vista teórico, las llamadas balanzas fiscales carecen de sentido. El concepto tiene un vicio de partida: en contra de lo que quieren indicar, no son las comunidades autónomas las que contribuyen con impuestos o reciben los bienes, sino los ciudadanos. La equidad no puede medirse en clave territorial, ha de hacerse en clave personal. La cuestión no es tanto si una comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, son gravados en una cuantía similar y obtienen

los mismos servicios. Igualdad que ha comenzado a cuartearse en España debido precisamente a la transferencia a las autonomías de facultades normativas sobre los impuestos.

El mal llamado déficit o superávit fiscal de una comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. La política redistributiva del Estado tiene que conducir, lógicamente, a que las autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional presenten superávit en su llamada balanza fiscal. Por el contrario, parece natural que aquellas que disfrutaran de una renta per cápita superior a la media arrojen déficit.

«Las balanzas fiscales constituyen el arma favorita de los nacionalismos para practicar su política victimista»

Déficit o superávit no tienen ninguna significación salvo la de indicar que nos encontramos ante una comunidad rica y más próspera que el resto o, por el contrario, pobre y más deprimida. El concepto, sin embargo, se transforma en peligroso si se utiliza a modo de arma arrojada por unas autonomías contra

otras, generalmente como instrumento por parte de las más acomodadas para combatir la política redistributiva interterritorial que, en el fondo, es la misma que la que se produce entre las personas.

El PSC insiste en el principio de «ordinalidad». Palabra que por cierto no existe en el diccionario. Es un intento de separarse algo del nacionalismo, pero no mucho, admitir la solidaridad ma non troppo. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva «no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia».

Si por condición relativa se entiende el orden establecido de las comunidades respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora bien, si lo que se pretende es que las comunidades que más contribuyan tengan que ser también las que más reciban, contradeciría la misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos.

Desde el punto de vista práctico, la elaboración de las balanzas fiscales está sometida a todo tipo de errores y -lo que quizá sea más grave- condicionada y necesitada de toda clase de suposiciones o

de hipótesis que multiplican hasta el infinito las versiones posibles. Esta relatividad en su confección incrementa enormemente la peligrosidad, y su capacidad para ser utilizadas de forma sectaria. Constituye desde luego el arma favorita de los nacionalismos para practicar su política victimista.

«Con una hacienda pública centralizada no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos»

En una economía interrelacionada y con una hacienda pública -tal como debe ser- centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. Comenzando por los ingresos, la comunidad en la que se ingresan los impuestos no tiene por qué ser, y la mayoría de las veces no lo es, la comunidad cuyos residentes han soportado el gravamen.

Los impuestos directos se imputan normalmente a la provincia en la que reside el contribuyente. Las sociedades, por tanto, ingresarán sus gravámenes en la comunidad donde tienen su domicilio fiscal, aun cuando tengan varios establecimientos permanentes (o incluso, como en el caso de las grandes empresas, que son las que más tributos han de pagar, infinidad de ellos) distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.

Serán, por consiguiente, Madrid y Barcelona las provincias que recibirán la mayor parte de la recaudación. Si en lugar de comunidades autónomas se tratase de países diferentes, la imputación sería muy distinta, ya que los establecimientos permanentes pagarían en el país en el que estuviesen situados.

No obstante, el error mayor en la imputación de los impuestos se produce en los indirectos, puesto que se recauda en el domicilio fiscal de la empresa o de los particulares que repercuten el gravamen, no donde reside el consumidor que es quien verdaderamente soporta la carga fiscal.

«Los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos ¿cómo se reparten entre las distintas autonomías?»

Los principales problemas a la hora de regionalizar ocurren, sin embargo, en las partidas de gastos. Es fácil y casi inmediata la atribución de los acometidos por la propia comunidad, pero resulta mucho más complejo repartir aquellos que realiza la administración central. Surgen muchas dudas cuando se intenta saber qué es lo que hay que imputar y a quién.

Las obras del AVE o una autopista que atraviesa varias autonomías, ¿en qué proporción deben ser imputadas a ellas o a los puntos de origen y destino?; los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos ¿cómo se reparten entre las distintas autonomías?; ¿las pensiones de los jubilados que se trasladan a ciertas zonas costeras deberían atribuirse a estas?; los gastos de mantenimiento de aquellos organismos e instituciones cuyo servicio se destina a toda España ¿deben aplicarse a la comunidad en la que están situados o repartirse entre todas ellas?; ¿cómo se distribuyen las contribuciones que España paga a la Unión Europea o los intereses de la deuda pública? El número posible de ejemplos sería casi infinito, lo que dota a los resultados de un carácter subjetivo y, en cierto modo, arbitrario.

Pero, aunque nos hubiésemos puesto de acuerdo sobre el método y los criterios de imputación -lo que ya es bastante difícil-, se cometería un gran número de errores. La mayoría de las partidas del gasto de la administración central se encuentran contabilizadas globalmente y resulta muy complicada su posterior regionalización. Por mucho que se exija a los distintos gestores ministeriales que intenten indicar qué parte del gasto afecta a cada una de las comunidades, el cúmulo de yerros y de equivocaciones será considerable, puesto que la estimación inevitablemente será muy burda.

Las posibilidades son numerosas, lo que dota a los resultados de un carácter al menos relativo, dependiendo de los supuestos e hipótesis adoptados, pero ello no impide que en casi todas las versiones -excepto las elaboradas por la Generalitat con una metodología claramente subjetiva y sectaria- se produzca una cierta similitud en los hechos relevantes que las balanzas arrojan. En líneas generales y salvo algunas excepciones (País Vasco y Navarra), existe una correlación entre el saldo de las balanzas fiscales y la renta per cápita, según sea esta inferior o superior a la media nacional.

«El nacionalismo catalán ha basado su victimismo en la elaboración de unas balanzas fiscales 'sui generis'»

El nacionalismo catalán ha basado su victimismo, entre otras falsedades, en la elaboración de unas balanzas fiscales sui generis con un criterio inasumible como es el del flujo monetario, esto es, atribuir el gasto o el ingreso a la comunidad en la que se produce el pago o se realiza el cobro, lo que conduce a situaciones tan absurdas como que los gastos que ocasiona la permanencia de la Legión en Canarias se imputen a dicha comunidad.

O que se considere a la Comunidad Autónoma de Madrid como la única beneficiaria de la mayoría de los gastos de funcionamiento de la administración central. O que la carga financiera del servicio de la deuda se impute a la comunidad a la que pertenecen los inversores que cobran los intereses. Los beneficiarios del endeudamiento público no son, lógicamente, los tenedores de los bonos que han invertido en ellos como podían haber invertido en cualquier otro tipo de títulos, sino la hacienda pública y, por consiguiente, todos los ciudadanos.

Parece bastante claro que el criterio que debe adoptarse es el de la carga-beneficio (que es el empleado por Eurostat en la regionalización de las cuentas de las administraciones públicas) consistente en atribuir cada partida a la comunidad cuyos residentes soportan la carga fiscal o se benefician de los servicios correspondientes.

La contestación dada por la ministra de Hacienda a la petición de los independentistas respecto a las balanzas fiscales es muy preocupante. Vino a decir que el Ministerio no las elaboraría, pero que facilitaría los datos para que la Generalitat pudiese confeccionarlas. No resulta difícil suponer con qué criterios y cuáles van a ser los resultados. Prepararán el camino para romper definitivamente la unidad de la hacienda española y la política redistributiva del Estado. ¿Tierra firme? No. Tierra quemada.

Opinión

La dictadura de las minorías

«No sé si tenemos los políticos que merecemos, pero las políticas que padecemos son en buena medida consecuencia de nuestros cálculos interesados»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Javier Benegas

🕒 Publicado: 09/02/2024

Es bastante habitual referirse a la sociedad como un rebaño de ovejas que es conducido de un lado a otro, incluso al matadero, sin ninguna resistencia. Individualmente, según parece, somos suficientemente inteligentes y astutos para advertir las perversas intenciones de los pastores pero extrañamente, cuando nos sumamos en la masa, nos vemos arrastrados sin remedio por la estupidez ovejuna.

Esta visión, que traslada la responsabilidad a una entidad abstracta y colectiva, cuyo común denominador es la estupidez, ignora precisamente que es la inteligencia de cada cual para el cálculo coste beneficio lo que permite a los políticos manipular a la sociedad y conducirla como a un rebaño. Los gobernantes han aprendido que, más allá de proclamas genéricas, que nunca se sustancian en medidas concretas y eficaces, les basta con favorecer los intereses de grupos minoritarios para someter a todos los demás.

La idea de que la política puede ser capturada por grupos minoritarios no es nada nuevo. Ya fue contemplada en 1957 por Anthony Downs en *An Economic Theory Of Democracy*, donde acuñó el concepto de «coalición de minorías», según el cual un partido podría ganar las elecciones proponiendo medidas que favorecieran a grupos minoritarios. Más tarde Mancur Olson, en *The Rise and Decline of Nations* (1982), mostró que, debido a que la dinámica de costes y beneficios favorece la creación de pequeños grupos de intereses, estos se impondrían al bien común y acabarían capturando los partidos, los gobiernos y sometiendo a toda la sociedad en beneficio de unas minorías.

Un ejemplo reciente de esta forma de control nos lo ha proporcionado la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, con su referéndum para penalizar a los vehículos

SUV, (acrónimo del inglés sport utility vehicle) multiplicando por tres el coste del estacionamiento regulado en los distritos más céntricos. La justificación es, cómo no, de corte ecologista. El argumento es que este tipo de automóvil es poco amigable con el medio ambiente y resulta bastante más pesado y peligroso para los peatones que los compactos o berlinas convencionales.

Hasta aquí todo es bastante previsible, acorde con las justificaciones acostumbradas en materia de restricciones y prohibiciones al tráfico rodado con las que, según dicen las almas bellas, se pretende humanizar las ciudades dando más espacio a las personas en detrimento de las máquinas, porque, como todos sabemos, los automóviles son artilugios infernales a las órdenes de Skynet y no meras herramientas al servicio de los seres humanos.

«El objetivo de Anne Hidalgo no era salvar el planeta sino incrementar la recaudación porque más dinero significa más poder»

Pero no me voy a detener en la discusión ecologista. Lo que me interesa señalar es el sesgo con el que Anne planteó la votación. Preguntó a los parisinos si estaban a favor o no de «un aumento muy importante de las tarifas de aparcamiento no residencial de los

SUV y 4×4». Es decir, astutamente sólo abrió la puerta a una fuerte subida de tarifas para ese tipo de vehículos, nunca a una rebaja para los automóviles más utilitarios.

Si el objetivo ciertamente era desincentivar los SUV, Anne también podría haber recurrido a una subida pasiva mediante la rebaja de tarifas para los vehículos pequeños, en vez de sólo dar opción a la subida para los más grandes, pero no lo hizo por una razón que poco tiene que ver con proteger a los humanos de la malvada Skynet. El objetivo de Anne no era salvar el planeta sino incrementar la recaudación porque más dinero significa más poder para el político.

El referéndum de París es un claro ejemplo de cómo los políticos dirigen a la sociedad como un rebaño sin necesidad de convencer a la mayoría sino favoreciendo a unas pocas ovejas... ovejas que además no serían tan estúpidas como creemos porque, en realidad, tomarían su decisión muy conscientes de sus propios intereses, mientras que el resto del rebaño simplemente no se sentiría concernido. Al fin y al cabo, no todo el mundo conduce habitualmente un automóvil. Y los que lo hacen, se dividen en diferentes tipologías de vehículos. De estos, sólo una parte significativa pero no mayoritaria opta por un SUV.

Los afortunados residentes de los distritos más céntricos de París serían, pues, falsas ovejas. En su caso, la iniciativa de Anne supone claros beneficios sin apenas perjuicios porque ellos pueden aparcar libremente en los distritos que residen. Es decir, tienen fuertes incentivos para apoyarla y ningún inconveniente. Del resto, sólo quien tenga un SUV, viva en el extrarradio y se vea en la necesidad de acceder a París de forma cotidiana, se sentirá perjudicado. Así, a la mayoría de los parisinos le resbalará el referéndum y a Anne le bastará el puñado de votos favorables de los más interesados para salirse con la suya.

«Numerosos ciudadanos que viven en el extrarradio ahora deberán pagar el triple por aparcar en París»

Y así ha sido. El resultado del referéndum ha sido favorable para esta nueva medida coercitiva con un 54,55% de los votos... y apenas el 5,7% de participación de quienes tenían derecho a voto. De esta forma, la alcaldesa socialista ha logrado en teoría nuevos ingresos con los que aumentar su poder presupuestario a costa de numerosos ciudadanos que viven en el extrarradio y que ahora deberán pagar el triple por aparcar en París, ni más ni menos que 18 euros la hora.

Anne lo ha logrado de manera aparentemente democrática, aunque muy poco legítima, aprovechando la lógica de la acción colectiva, según la cual las personas sólo se interesan realmente por las medidas políticas que les afectan de forma muy directa. Y lo hacen, además, de manera asimétrica. Cuando anticipan que sus costes recaerán sobre terceros, pero no sobre ellas, apenas se oponen, mientras que si perciben con claridad un beneficio particular las apoyarán con decisión, incluso con vehemencia.

Los políticos usan esta asimetría en su favor para, con muy pocos apoyos reales, incrementar de forma gradual la recaudación y alcanzar mayores cotas de poder. Así, sin que apenas nos resistamos, declaran que, por nuestro bien, subirán los impuestos a los más ricos para acabar subiéndolos a todos... en beneficio de sí mismos y de las minorías interesadas que necesitan para lograrlo.

Hace no tanto se debatía la pertinencia del estacionamiento regulado. Hoy ya casi nadie lo discute. De hecho, en París antes de este referéndum se asumía como normal pagar seis euros la hora por aparcar en la calle sin otra contrapartida que el derecho a ser vigilado por si faltaba el papelito o se excedía unos minutos del tiempo abonado. De igual manera, hace apenas 75 años el gasto de los Estados europeos apenas representaba en 20% de producto interior bruto, hoy flirtea con el 50% cuando no lo supera con holgura.

«Los políticos nos ‘trolean’ con nuestra indiferencia, porque descontamos que pagará el de al lado, o con nuestra complicidad»

Ahora ya no son sólo las emisiones o la rotación del espacio disponible en las ciudades, también puntúa algo tan subjetivo como la forma del vehículo y la percepción amenazante que el político aliente a conveniencia. Y es que lo del peso es una broma porque raro es hoy el vehículo del segmento C, el tradicional familiar, que no supera holgadamente los 1.400 kg en vacío, entre otros motivos por las incesantes exigencias regulatorias en materia de seguridad y emisiones que los fabricantes, haciendo de la necesidad virtud, han tenido que asumir como principales argumentos comerciales.

Debería abrirnos los ojos que, para salvar el planeta, mientras en París se añade un castigo adicional por la forma y el peso a los vehículos particulares, sin rebajar un ápice el de los más ligeros y modestos, el Ayuntamiento de Madrid adquiera 200 BMW de a 60.000 euros la pieza y con un peso en vacío que oscila entre los 2.100 y los 2.300 kg para perseguir por la ciudad a los monstruosos utilitarios de los conductores

menos pudientes. Me parece una metáfora sublime de cómo los políticos, sean franceses, españoles, suecos o portugueses nos trolean por tierra, mar y aire... con nuestra indiferencia, porque descontamos que pagará el de al lado, o con nuestra complicidad, porque creemos que nos beneficiaremos a costa de un tercero. No sé si tenemos los políticos que merecemos, pero las políticas que padecemos son en buena medida consecuencia de nuestros cálculos interesados.

Opinión

De cómo Sánchez traicionará a Illa

«Lo peor que le puede pasar a Sánchez es una victoria del PSC en las catalanas, de hecho, cuanto peor le vaya al PSC, más opciones tendrá él para continuar en Moncloa»



El líder del PSC, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press.



César Calderón
[@CesarCalderon](#)

Publicado: 05/02/2024

El Gobierno de Sánchez ha vuelto a tener una semana horribilis. No será la última.

La caótica votación de la Ley de Amnistía y la sádica humillación a la que Carles Puigdemont ha sometido a un partido con más de 140 años de historia ha ensanchado la ya profunda sima que separaba al partido de Sánchez de una buena parte sus votantes, produciendo una ruptura emocional de los lazos que les unían al PSOE difícilmente reversible.

Una quiebra que se va a mostrar con diferentes grados y matices en las distintas estaciones en las que se va a detener el tren electoral que ya se ha puesto en marcha y que tras recorrer Galicia y Euskadi terminará su viaje en Cataluña tras una breve parada en Bruselas.

Cuatro elecciones que se van a suceder una detrás otra y en las que a pesar de que todas ellas van a ir mellando la moral de la tropa sanchista, solo una, me refiero naturalmente las catalanas previstas para 2025, puede tener efectos potencialmente disolventes para la actual legislatura.

Olvidémonos pues de las tres primeras, cuyo resultado difícilmente condicionarán la continuidad del Gobierno y pongamos nuestros ojos en las elecciones catalanas, unos comicios en los que tal y como están las cosas, vamos a ir probablemente a uno de estos dos escenarios: el escenario Reventós o el escenario Benegas.

Spoiler: ninguno de los dos escenarios termina bien para el PSC.

Escenario Reventós

Hagamos un poco de historia: corría el año 1980 y los catalanes se disponían a acudir a las urnas para elegir al primer presidente de la Generalitat tras cuarenta años de dictadura.

La Cataluña de aquellos años era sociológicamente un territorio de izquierdas, muy de izquierdas; un espacio en el que si atendemos a todas las encuestas, los socialistas del PSC encabezados por Joan Reventós y los comunistas del PSUC liderado por Josep Benet iban a disputarse el encabezar el Gobierno.

Así, ambos partidos se enzarzaron en una campaña a cara de perro tras la cual un sorprendente Jordi Pujol al frente de un partidito nacionalista recién creado logró colarse por debajo de la puerta ganando las elecciones a ambos y alzándose con la presidencia de la Generalitat gracias a los votos de ERC y de la UCD. Todo ante la pasividad de un PSOE nacional que, lejos de apretar a comunistas y centristas para conseguir que Reventós llegase al Palau de la Generalitat, miró para otro lado al considerar que era más útil para el partido a nivel nacional no contaminarse en un gobierno de esas características para llegar limpio de polvo y paja a la Moncloa en las siguientes elecciones generales.

Escenario Benegas

Sigamos haciendo un poco de historia y vayamos al año 1986. El PNV se ha partido en dos mitades tras la escisión de Carlos Garaikoetxea y, tras el adelanto electoral subsiguiente, el PSE encabezado por Txiki Benegas es el partido con más diputados en el Parlamento vasco adelantando al PNV, 19 socialistas frente a 17 jeltzales.

En las negociaciones posteriores, los socialistas, a pesar de haber ganado las elecciones y pensando en atornillar al PNV como aliado en Madrid, transigieron en votar al nacionalista José Antonio Ardanza como lehendakari, lo que provocó la dimisión de Benegas.

«Entiendo que todos sabemos lo que hará Sánchez si tiene que elegir entre Illa y Su Persona, ¿verdad?»

¿Y cómo trasladamos estos hechos al escenario político actual? Pues yo creo que es casi automático:

Cuando se produzcan las elecciones catalanas, si no nos encontramos en un (posible aunque improbable) «escenario Reventós», que sin duda clarificaría el paisaje, lo que dicen las encuestas es que estaremos ante una victoria clara de Salvador Illa que a pesar de la nitidez de la misma sería insuficiente para gobernar en solitario, lo que conduciría a los socialistas catalanes a tres posibles escenarios: dos de ellos imposibles y uno directamente dramático:

1.- Si el PSC pacta el gobierno de Cataluña con ERC, Puigdemont pasaría a la oposición en Madrid, lo que tarde o temprano haría caer al Gobierno.

2.- Si el PSC pacta el gobierno de Cataluña con Puigdemont, ERC pasaría a la oposición en Madrid, lo que tarde o temprano haría caer el Gobierno.

3.- El *escenario Benegas*, Illa sacrificaría sus opciones para presidir la Generalitat y propiciaría desde la oposición o desde dentro, un gobierno de Junts o de ERC (o de ambos), lo cual permitiría a Sánchez prolongar su mandato.

Es decir, que resumiendo mucho, lo peor que le puede pasar a Pedro Sánchez es una victoria del PSC en las elecciones catalanas, de hecho, cuanto peor le vaya al PSC, más opciones tendrá él para continuar en Moncloa.

Porque entiendo que todos sabemos lo que hará Sánchez si tiene que elegir entre Illa y Su Persona, ¿verdad?